

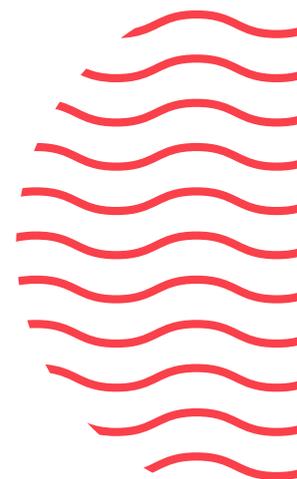
40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Consensos y prioridades de las
juventudes y la dirigencia política



PRIORIDADES PARA UNA AGENDA INTERGENERACIONAL Y FEDERAL DE DESARROLLO

SÍNTESIS DE MESAS REGIONALES
DE DEBATE



CIPPEC[®]



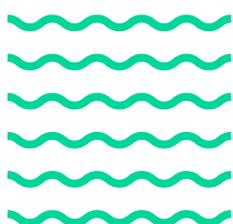
Cofinanciado por
la Unión Europea

 RED**APPE**



ÍNDICE

3	INTRODUCCIÓN
6	JUSTICIA EDUCATIVA Y ARTICULACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO
25	REDUCIR LA POBREZA
31	LOGRAR LA TRANSICIÓN VERDE JUSTA Hacia un sector energético sostenible Política integral de mejoramiento de viviendas
51	CONSOLIDAR UNA POLÍTICA EXTERIOR AL SERVICIO DEL DESARROLLO NACIONAL





INTRODUCCIÓN

En 2023, nuestra democracia cumple 40 años. Cuatro décadas de elecciones ininterrumpidas y diez elecciones presidenciales. Un hito que en el pasado parecía inalcanzable y que ahora genera el espacio para hacer balances y, sobre todo, para mirar hacia adelante. A raíz de que este logro enorme convive con asignaturas pendientes, queremos aprovechar este aniversario como inspiración para propiciar acciones que nos lleven a un futuro mejor.

Por eso, CIPPEC lanzó la iniciativa Democracia 40 (#40D), en 2021: un proceso participativo, multiactoral, federal e intergeneracional, de co-construcción de prioridades para el desarrollo argentino, con el objetivo de elaborar recomendaciones concretas de políticas públicas para abonar a una agenda de desarrollo. El país requiere de políticas impulsadas por un acuerdo intergeneracional que delimite un horizonte común entre los liderazgos de hoy y los futuros, en base a prioridades y agendas compartidas que consideren las preocupaciones y prioridades de las juventudes.

El proyecto de CIPPEC, con el apoyo de REDAPPE y co-financiado por la Unión Europea, “40 años de democracia. Consensos y prioridades de las juventudes y la dirigencia política” se desprende de este proceso. Durante todo el 2022 se realizaron distintas actividades en una plataforma online en la cual participaron jóvenes, especialistas y representantes de la dirigencia sobre las temáticas centrales para el desarrollo argentino.

Por un lado, se organizó una serie de foros virtuales para capturar las opiniones del público especializado, alrededor de las cinco prioridades del proyecto: alcanzar la justicia educativa, potenciar la matriz productiva, reducir la pobreza, lograr una transición verde justa y consolidar una política exterior al servicio del desarrollo nacional. Asimismo, se relevaron las preocupaciones, intereses y demandas de política pública de jóvenes de entre 16 y 29 años de todo el país a través de unas consultas online sobre dichas prioridades temáticas, con el objetivo de incorporar la mirada de las juventudes.

Este proceso, cuya síntesis está [disponible online](#), contribuyó a destilar los ejes temáticos priorizados en recomendaciones de políticas públicas puntuales. A partir de ese insumo, y del trabajo de investigación basado en evidencia de los equipos CIPPEC y REDAPPE, se organizaron cinco mesas regionales a lo largo del 2023, en las cuales se llevó al plano subnacional las temáticas identificadas como prioritarias en pos de consolidar una agenda de desarrollo para los próximos 40 años de democracia.

Este documento es la síntesis de cinco mesas de debate intersectorial e intergeneracional, que versaron sobre uno o más ejes priorizados de política pública del proyecto. En ellos participaron más de 250 especialistas técnicos, referentes

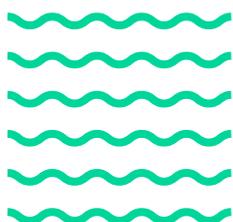
INTRODUCCIÓN

de sectores juveniles y personas que desempeñan la función pública en distintos niveles de gobierno de todo el país, con representatividad de género, etaria y federal. El objetivo de cada uno de los encuentros, uno por región de la Argentina (Centro; Cuyo; NEA; NOA y Patagonia), fue identificar consensos, cuellos de botella y posibles estrategias para sortearlos, de cara a robustecer las recomendaciones de políticas públicas en materia de factibilidad técnica, operativa y fiscal. A su vez, los encuentros se plantearon incidir en las dirigencias (política, sindical, empresarial y del tercer sector) y consolidar redes multiactorales, para posicionar las temáticas, en general, y las recomendaciones de política, en particular, se incluyan e implementen en las próximas administraciones públicas.

Sobre la participación:

El intercambio se rigió por la Regla de Chatham House, por lo que aportes, opiniones y afirmaciones de las personas participantes están anonimadas, de forma tal de garantizar la libre expresión y fomentar la “cultura del encuentro”, habilitando identificar puntos de consensos y disensos en cada temática. Referentes y expertos/as de distintas organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales, universidades, empresas y sindicatos participaron de los debates. Por mencionar algunas: Cámara de Diputados/as de la provincia de Salta; Gobernación de la Provincia de Jujuy; Municipalidad de San Salvador, Municipalidad de Palpalá, Municipalidad de San Lorenzo, Municipalidad de Tafí Viejo, Jóvenes por el Clima, Gobernación de la Provincia de Córdoba; Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Río Cuarto; Ministerio Nacional de Desarrollo Social, Secretaría de Integración Sociourbana, Dirección General de Empleo y Capacitación, la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico del Ministerio de Economía de la Provincia de Mendoza, Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza, Municipalidad de Godoy Cruz y Consejo Deliberante de Godoy Cruz; Enlazados, Concejo Deliberantes de Neuquén, Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén; Chevron; IMPSA; Legislatura del Neuquén; Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP); Secretaría de Energía de Neuquén; Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios; Ministerio de Producción e Industria de Neuquén; Fundación Universitaria Río de La Plata; Instituto Superior Politécnico Córdoba; Junior Achievement; Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba; Municipalidad Alta Gracia; Sobre Tiza; Centro Experimental de la Vivienda Económica - CONICET; Juventud Universitaria Peronista; Juntas por el derecho a la ciudad Córdoba; Ministerio Hábitat de la Provincia de Córdoba; Movimiento Nacional de Inquilinos en Córdoba; Red Ciudadana Nuestra Córdoba; TECHO; Universidad Católica de Córdoba; Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy; Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy.

La moderación de las distintas mesas, así como la síntesis, compilación y análisis de los aportes de especialistas y comunidades de políticas de cada área temática tratada en las mesas regionales estuvo a cargo de los equipos de CIPPEC y REDAPPE.



Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la posición institucional de CIPPEC en los temas analizados, dado que sintetizan el intercambio entre actores de distintas organizaciones y organismos.

**JUSTICIA
EDUCATIVA Y
ARTICULACIÓN
CON EL MUNDO
DEL TRABAJO**



JUSTICIA EDUCATIVA Y ARTICULACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO

Este documento fue elaborado en base a las mesas de trabajo de las regiones NEA y Centro sobre 'Justicia educativa y articulación con el mundo del trabajo', que se desarrollaron el 6 de marzo en Chaco y el 25 de abril en Córdoba, respectivamente.

Estas se enmarcan dentro del proyecto "40 años de democracia. Consensos y prioridades de las juventudes y la dirigencia política" (#40D) liderado por CIPPEC, con el apoyo de REDAPPE y co-financiado por la Unión Europea. Su objetivo es impulsar un proceso de diálogo público participativo, intergeneracional, federal y multiactoral basado en evidencia para producir recomendaciones concretas de política pública que contribuyan a una estrategia de desarrollo sostenida para la Argentina.

Durante el 2022 se llevó adelante un [proceso de consulta](#) del cual participaron jóvenes, especialistas y representantes de la dirigencia sobre los pilares centrales para el desarrollo argentino. En particular, se realizó un relevamiento digital dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años de todo el país sobre las demandas, prioridades y preocupaciones de las juventudes en dichos pilares. En el eje sobre justicia educativa y articulación con el mundo de trabajo, el 63% de las personas encuestadas manifestó que la escuela secundaria no responde a los intereses de los y las estudiantes, y el 67% opinó que tampoco acompaña a aquellos y aquellas en situación de riesgo de exclusión. Asimismo, vale resaltar que el 70% de quienes contestaron advirtió que la educación secundaria no facilita la transición de los y las jóvenes hacia el mundo del trabajo. De los resultados de este proceso, y el trabajo del programa de Educación de CIPPEC, se desprende el encuadre de los encuentros regionales del NEA y Centro.

A lo largo de los encuentros se propuso debatir sobre propuestas concretas para promover la articulación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo, a través de una transformación del nivel que se apoya en tres pilares: la implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT), la extensión de la jornada escolar y la vinculación con el mundo del trabajo. Esta transformación tiene como objetivo que la totalidad de los y las jóvenes ingresen al nivel secundario y se gradúen incorporando aprendizajes significativos que faciliten su transición hacia la vida adulta y la construcción de su proyecto de vida.

Los encuentros contaron con la participación de representantes de la comunidad educativa, del sector público, del sector productivo y de otras organizaciones referentes de la temática. Para ambos eventos, en un primer momento se presentó un breve diagnóstico sobre la escuela secundaria y la propuesta de transformación elaborada por CIPPEC. Luego, en el caso de la mesa NEA, los participantes se dividieron en tres grupos para identificar las fuerzas a favor y en contra de la

implementación de cada uno de los pilares de la propuesta. En el caso de la mesa Centro, se focalizó en debatir en torno a dispositivos de articulación con el mundo del trabajo. Finalmente, en un segundo momento, los participantes debatieron sobre posibles estrategias para aprovechar o superar esas fuerzas.

A continuación, se resume la información presentada y la discusión que se dio en cada uno de los grupos de trabajo de ambas mesas. Para eso, lo que resta del apartado se divide en tres grandes secciones. En la primera se describirá brevemente el diagnóstico presentado sobre la escuela secundaria. En las otras dos se sintetizará la propuesta debatida en cada una de las mesas con sus respectivas subsecciones acorde a los pilares trabajados, en los cuales se detallarán los aportes realizados por los y las participantes.

DIAGNÓSTICO

Una sociedad que aspira al crecimiento económico y a una distribución más justa de oportunidades, el desarrollo de las capacidades de las juventudes es crucial para apalancar el desarrollo del capital humano con el que cuenta el país. Las capacidades desarrolladas durante la niñez y la juventud determinan, en buena medida, las oportunidades y herramientas que van a tener las personas para construir su proyecto de vida y para integrarse activamente en el mundo del trabajo.

En nuestro país, prácticamente la totalidad de los y las adolescentes que finalizan la escuela primaria ingresan al nivel secundario. Sin embargo, se observan grandes dificultades en el nivel para garantizar trayectorias escolares completas y aprendizajes de calidad para todos. De hecho, apenas 2 de cada 10 estudiantes que ingresan a la primaria, llegan al último año de la secundaria en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática (Argentinos por la Educación, 2022).

A pesar de no hacerlo en tiempo y forma, para gran parte de los y las jóvenes la escuela secundaria es el último nivel educativo formal al que accederán. A nivel nacional, 7 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 29 años termina ese nivel, y solo 4 de cada 10 acceden luego a la educación superior. Esto implica que, durante los primeros años de la juventud, la mayoría de las personas enfrentará el mercado laboral con su formación secundaria y el capital sociocultural que acumularon en sus familias de crianza. De allí surge la importancia de pensar la contribución que hace la escuela secundaria al desarrollo de las capacidades de las personas.

Las dificultades que arrastra la secundaria están en gran parte asociadas a una impronta excluyente, reflejada en una matriz enciclopedista y una organización rígida en ciclos y disciplina, así como en el débil vínculo de las políticas educativas con el resto de las políticas sociales y en la escasa articulación con el mundo del trabajo. Para lograr que todos los y las jóvenes ingresen al nivel secundario y se

gradúen incorporando aprendizajes significativos que faciliten su transición hacia la vida adulta y la construcción de su proyecto de vida, es necesario pensar en un nuevo modelo de escuela secundaria. Frente a este reto, se presenta la propuesta de transformación de la escuela secundaria elaborada por CIPPEC, la cual se apoya en tres pilares: un sistema de alerta temprana, la extensión de la jornada escolar y la vinculación con el mundo del trabajo.

Sistema de alerta temprana (SAT) para prevenir la exclusión escolar

Un SAT es un dispositivo orientado a la prevención de la exclusión escolar que utiliza la información que produce el sistema educativo para monitorear las trayectorias y disparar alertas ante un riesgo de exclusión. Su propósito es realizar un acompañamiento personalizado de las trayectorias escolares de los y las estudiantes y orientar intervenciones tempranas para el abordaje de estas situaciones.

El SAT está conformado por: a) un sistema de información nominalizado de estudiantes (construido a partir de los datos que registra el sistema educativo, como la asistencia, las calificaciones y otros datos cualitativos relevantes); b) equipos escolares formados para intervenir oportunamente en situaciones de riesgo de exclusión escolar; y c) por una serie de estrategias e intervenciones para que los equipos directivos y docentes realicen el acompañamiento personalizado de las trayectorias escolares e intervengan tempranamente ante el riesgo de exclusión.

Extensión de la jornada escolar

La propuesta consiste en sumar dos horas diarias a la jornada de la escuela secundaria para reforzar los aprendizajes fundamentales de todos los y las estudiantes, facilitar la transición hacia el mundo del trabajo, y acompañar las trayectorias escolares de quienes se encuentran en riesgo de exclusión escolar. En este sentido, sería posible destinar más horas de clase a Matemática, Lengua e inglés; a la definición de instancias de tutoría y de nivelación de aprendizajes; a la creación de espacios curriculares electivos que estén asociados a los intereses de los y las estudiantes y que busquen desarrollar capacidades y habilidades para la inserción en la vida social y laboral; y, finalmente, a dispositivos concretos de articulación entre la escuela y el sector productivo.

La extensión de la jornada escolar pretende sacudir el modelo institucional rígido de la escuela secundaria. Para ello, se propone combinar tiempos escolares presenciales con instancias virtuales, en los casos que sean posible.

Además, se espera que esta iniciativa contribuya a enriquecer la propuesta formativa a partir de la diversificación de los formatos de clases (talleres, aprendizaje por

proyectos, trabajo interdisciplinario, tutorías, actividades deportivas/culturales) y a fortalecer el vínculo de la escuela con su territorio a partir de la promoción de actividades educativas en otros entornos (clubes, bibliotecas populares, centros culturales o asociaciones vecinales).

Vinculación con el mundo del trabajo

La articulación de la educación secundaria con el mundo del trabajo requiere de abordajes sistémicos que reconozcan el lugar que ocupa el trabajo remunerado en las oportunidades de las personas para construir su proyecto de vida. Se trata de posicionar a la articulación de la educación y el trabajo como perspectiva transversal del sistema educativo y a la escuela secundaria como instancia propicia para dotar a las juventudes de saberes y herramientas para interpretar e interactuar en entornos laborales.

Para ello, es preciso promover la transversalización de los saberes para el trabajo en el *currículum* y en las prácticas pedagógicas de la secundaria. En este sentido, dentro del margen provisto por la extensión de la jornada escolar se proponen dos dispositivos que pueden favorecer esta articulación.

El primero es la incorporación y profundización de contenidos vinculados con el mundo del trabajo dentro de las unidades curriculares existentes y/o la creación de nuevos espacios curriculares, en el marco de la extensión de la jornada escolar. El segundo es la creación de un sistema de prácticas profesionalizantes para las escuelas secundarias orientadas. Este dispositivo podría combinarse con otras actividades como salidas educativas a empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos de gobierno, entre otros.

MESA REGIONAL NEA

Sistema de Alerta Temprana

El grupo que trabajó sobre este pilar estuvo compuesto por representantes de la comunidad educativa y del sector público. Consultados acerca de sus primeras reacciones ante la propuesta, los y las participantes coincidieron en que la implementación de un SAT es una estrategia pertinente para fortalecer la trayectoria de los y las estudiantes. No obstante, advirtieron que para que sea una herramienta eficaz es necesario garantizar ciertas condiciones que se detallarán más adelante.

Luego de las reacciones iniciales, se les propuso a los y las participantes que identifiquen y escriban en un papel las fuerzas a favor y en contra de la implementación de este pilar. En la **Tabla 1** se transcriben todos los aportes realizados.

TABLA 1.
Fuerzas a favor y en contra de la implementación de un SAT

Fuerzas a favor	Fuerzas en contra
Preexistencia de sistemas informales de seguimiento en algunas instituciones.	Dificultades para operativizar (logística, recursos, tiempo).
Herramienta vinculante de la información educativa para identificar a estudiantes en riesgo de exclusión o deserción.	Saturación de sistemas de información en las escuelas secundarias.
Existencia de acuerdos generales de que se debe abordar la problemática.	Sistemas de información educativa escasamente digitalizados.
Necesidad y utilidad (urgencia).	Sistemas de información educativa que tienen bajo nivel de protección de datos personales e institucionales.
Herramienta eficaz de trabajo con la información educativa para promover las articulaciones necesarias entre ciclos y niveles.	Necesitas equipos técnicos estables y formación para acompañar a las escuelas en el rol que les toca.
Herramienta de los sistemas de información educativa para planificar las acciones preventivas para el fortalecimiento de las trayectorias educativas.	La desorganización del ministerio complejiza la labor administrativa de los directivos y supervisores.
Anticipa las dificultades para permanencia en la institución.	Superposición de sistemas de información.
Posibilita contar con información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones.	Para operacionalizar una política hay que organizar el trabajo de quienes lo van a llevar a cabo (equipos escolares) ¿quiénes y cómo van a acompañar?
Acompañar.	Con la información ¿qué hacemos?
	La formación docente.
	Revisión de la escuela secundaria. Un espacio que favorezca la permanencia de estudiantes en la institución.
	Participación activa.

Fuente: elaboración propia.

De los aportes volcados por los y las participantes y de la discusión posterior, se desprenden algunos consensos generales sobre las fuerzas a favor y en contra de la implementación de un SAT. En cuanto a las fuerzas a favor, coincidieron en que la exclusión escolar es uno de los grandes desafíos del nivel secundario y que existe cierto grado de acuerdo entre los actores del sistema educativo respecto a que es una problemática que deber ser abordada de forma prioritaria. También coincidieron en que la implementación de un SAT es una estrategia adecuada para hacerlo. Destacaron que es una herramienta efectiva para identificar a los y las estudiantes con trayectorias debilitadas, y para orientar la toma de decisiones.

En cuanto a las fuerzas en contra, señalaron que hoy en día las escuelas y los ministerios de educación no cuentan con condiciones propicias para implementar un SAT de forma efectiva. En el caso de las escuelas, los directores y los docentes se encuentran sobrecargados de tareas y responsabilidades, lo que dificulta que dispongan del tiempo necesario para realizar las acciones requeridas por la herramienta. A su vez, en general, carecen de recursos y políticas acordes para fortalecer la trayectoria de los y las estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. En el caso de los ministerios, se señaló que la inestabilidad de sus equipos va en desmedro de la posibilidad de hacer un acompañamiento más cercano a las escuelas.

Considerando lo anterior, los y las participantes identificaron tres cuestiones a resolver para que el SAT sea una herramienta efectiva. En primer lugar, es importante definir qué perfil o perfiles dentro de la escuela serán los responsables de recibir y atender las alertas, y garantizar que dispongan del tiempo necesario para hacerlo. En segundo lugar, poner a disposición de las escuelas recursos pertinentes para fortalecer las trayectorias escolares de los y las estudiantes. En tercer lugar, favorecer la articulación entre las escuelas y el ministerio de educación provincial, delimitando claramente las responsabilidades de cada uno y complementando sus esfuerzos.

También se identificaron otras fuerzas en contra de la implementación de este pilar. Los y las participantes señalaron que existe una saturación y superposición de sistemas de información en las escuelas secundarias, y que, además, estos suelen tener un bajo nivel de protección de los datos personales e institucionales. Ambas cuestiones pueden generar resistencia por parte de los actores escolares.

Por otra parte, algunos de los y las participantes consideraron que la propuesta presentada es insuficiente para cumplir con su propósito: prevenir la exclusión escolar y fortalecer la trayectoria educativa de los y las estudiantes. En este sentido, por un lado, se dijo que el SAT brinda información pertinente y oportuna sobre cada estudiante, pero que no ofrece elementos suficientes para actuar a partir de ella. Por otro lado, también se dijo que si el SAT no se enmarca en una propuesta más general de transformación del nivel secundario resultará insuficiente.

Experiencias judiciales

SAT en Chaco

Se implementará un SAT en el nivel secundario a partir de los datos disponibles en el sistema de gestión provincial (Sistema Integrado de Educación). El sistema generará una alerta ante la tercera inasistencia consecutiva de cada estudiante.

SAT en Corrientes

Se implementará un SAT en los tres niveles obligatorios (nivel inicial,

primario y secundario). Clasificará la trayectoria de cada estudiante según tres categorías: i) trayectoria sostenida; ii) trayectoria intermitente; y iii) trayectoria de baja intensidad. En el caso de los alumnos con riesgo pedagógico, se utilizará otra plantilla para hacer un registro de las acciones a implementar y hacer un seguimiento.

Extensión de la jornada escolar

A comienzos del encuentro se detalló que la propuesta de extensión de la jornada de la escuela secundaria consiste en sumar dos horas diarias con los objetivos específicos de utilizar estos tiempos para reforzar los aprendizajes fundamentales de todos los y las estudiantes, acompañar las trayectorias de quienes se encuentren en riesgo de exclusión escolar y facilitar la transición hacia el mundo del trabajo. Se hizo énfasis en que esta propuesta se presenta como una alternativa al modelo institucional rígido de la escuela secundaria actual, razón por la cual propone contemplar iniciativas innovadoras y superadoras como el aprovechamiento de instancias y herramientas virtuales, la diversificación de formatos de clases y el fortalecimiento del vínculo de la escuela con su contexto y territorio a partir de la diversificación de espacios de clases.

El grupo que trabajó sobre este pilar estuvo compuesto por referentes de la academia, directivos y docentes del nivel secundario y representantes del sector público provenientes de la provincia de Chaco.

En una primera instancia se les consultó sobre sus primeras reacciones al diagnóstico y la presentación en general y, en particular, sobre el dispositivo a debatir por el grupo. Los y las participantes coincidieron en que la crisis en la escuela secundaria es evidente y que hay ciertas condiciones materiales, simbólicas y sociales que tienen que discutirse en paralelo a propuestas de esta índole.

Luego, se propuso a los y las participantes trabajar en una dinámica conjunta para identificar las fuerzas a favor y en contra de la implementación de este dispositivo. La **Tabla 2** resume los aportes realizados.

Una preocupación conjunta a varios participantes fue la “dificultad para cambiar” del sistema educativo, considerando, en particular, el rol de los docentes en aceptar y adaptarse a los mismos. También se señaló la dificultad de implementar este tipo de transformaciones en las escuelas secundarias rurales en donde se cuentan con mayores restricciones de infraestructura y contextos de procedencia disímiles.

Algunos perfiles verbalizaron su disenso con éstos últimos puntos. Sostuvieron que la propuesta no consideraba los esfuerzos realizados por algunos equipos docentes que ya se encuentran trabajando en dicha dirección, a pesar de no contar con estos dispositivos.

TABLA 2.
Fuerzas a favor y en contra de la extensión de la jornada escolar

Fuerzas a favor	Fuerzas en contra
(Aumento de la) inversión en el sector público.	Poca inversión en educación.
Suelo escolar y lugar escuela.	Pérdida del eje en la escuela y lo local (regional).
Compromiso (de los y las docentes) con la institución.	Alta carga de responsabilidad social derivadas a las escuelas.
Paradigma de la afectividad.	Resistencia de los docentes a los cambios.
Marco de posibilidad para buscar propuesta(s) de trabajo.	Peligro de continuar con lo mismo sin transformar la propuesta formativa.
Posibilidad de concentración horaria.	La no concentración de horas. Estructura de carga horaria de docentes.
Talleres de aprendizajes por proyectos.	La poca organización del sistema educativo.
Desarrollo de espacios curriculares donde permitan a los estudiantes insertarse a la vida social y laboral.	Espacio en escuelas de doble turno.
Ayuda a pensar otros formatos: espacios, tiempos, romper estructuras disciplinarias.	Condiciones materiales-simbólicas (fragmentación de saber, trabajo docente).
Propone al estudiante “apropiarse de la escuela” haciendo, participando, trabajando y aprendiendo de otros modos (por ej. Proyectos).	Marco de informalidad en determinadas prácticas, por ejemplo, de acompañamiento pedagógico.
Profundizan conocimientos.	Refuerza un formato escolar enciclopedista.
Combinar presencial con virtual.	
Adecuación a las nuevas realidades.	

Fuente: elaboración propia.

Vinculación con el mundo del trabajo

Por último, para el eje de dispositivos de vinculación de la educación secundaria con el mundo del trabajo, se presentó la propuesta de posicionar esta articulación de manera transversal al sistema educativo como una instancia ideal para fomentar en los y las jóvenes el desarrollo de saberes y apropiación de herramientas adecuadas para el mundo laboral. Para ello, se propusieron dos estrategias puntuales: i) la incorporación y profundización de contenidos vinculados con el mundo de trabajo, ya sea en la creación de nuevos espacios curriculares o en su inclusión transversal en unidades curriculares existentes; y ii) la creación de un sistema de prácticas profesionalizantes para las escuelas secundarias orientadas.

El grupo que trabajó este pilar estuvo compuesto por referentes del sector público chaqueño y correntino, académicos, directivos y docentes del nivel secundario, referentes del sector productivo y representantes de grupos de jóvenes. En términos

generales, el diagnóstico y la presentación de propuestas fue bien recibido en tanto se expresó un amplio consenso respecto de la crisis de la educación en el país. Algunos perfiles destacaron lo interesante de traer este conjunto de propuestas pensadas para la modalidad común de escuela secundaria, en especial al momento de debatir sobre la posibilidad de implementación de prácticas profesionalizantes y pasantías educativas.

Después de este espacio de reacciones iniciales se procedió a la discusión específica del pilar. En este caso, la dinámica varió en comparación a la de los otros dos grupos de trabajo, priorizando el tiempo de debate, en el que se aprovechó para intercambiar opiniones de los y las participantes. Es por eso que el trabajo “se invirtió”: primero se conversó en conjunto de manera abierta y luego, hacia el final del tiempo provisto, se procedió a la realización de la tabla conjunta de fuerzas a favor y en contra de los dispositivos debatidos.

Para proceder con la misma lógica de lo expuesto por los otros grupos de trabajo se presenta primero la **Tabla 3**, que resume los aportes realizados, y luego se desarrollan algunas de las consideraciones destacadas por algunos perfiles.

TABLA 3.
Fuerzas a favor y en contra de dispositivos de vinculación con el mundo del trabajo

Fuerzas a favor	Fuerzas en contra
Acompañar a los estudiantes en los saberes y prácticas necesarios en el mundo del trabajo y aportar su proyecto de vida.	Poca disponibilidad de espacios laborales (empresas, organismos) en condiciones de recibir grupos de estudiantes y poder generar experiencias valiosas de aprendizajes.
Incorporar contenidos dentro de las unidades curriculares existentes. Incentivas con nuevas herramientas y metodologías.	Bajo número de empresas y otros sectores que pueden recibir a los estudiantes. Es un gasto para la empresa lo que lleva a poca apertura del sector privado a las prácticas.
Nuevos espacios para explorar y encontrar sentido a los contenidos.	Baja disponibilidad de tutores en empresas.
Invitar a revisar la vida institucional.	Mover a estudiantes implica riesgos. Hay que resolver tema de seguro de movilidad y para el lugar de trabajo.
Aprovechar a docentes que tienen otra formación además de la docencia. Las Escuelas Secundarias cuentan con profesionales preparados para acompañar a los estudiantes en experiencia con el mundo del trabajo.	Falta de docentes que acompañen en el proceso (puesto de trabajo) y la formación docente no está vinculada al tema.
Partir de experiencias de implementación a partir de ETP, FP y Agencias de empleo.	La condición laboral docente es precaria. Falta de conocimiento y educación. Quienes tomarán esta responsabilidad de acompañar a los estudiantes tienen que saber el sentido de lo que se busca. Docentes tienen que estar acompañados por el equipo de conducción (docente).

Pensar otras posibilidades además de la pasantía. Por ejemplo: favorecer los microemprendimientos.	La burocracia para aplicar la ley de pasantías. Hay una falta de claridad en la regulación de la ley.
Motivación a otros docentes para crear proyectos de acompañamiento a los estudiantes.	Prácticas estigmatizantes que no respaldan objetivos formativos. Idealización de las prácticas: no todo contexto laboral es formativo para el estudiante.
Beneficios para la empresa no son inmediatos, pero sí a futuro.	Faltan espacios para repensar una nueva escuela.
Promover el desarrollo del idioma inglés ya que en este mundo globalizado es una herramienta súper valiosa que les ampliaría (Esto lo puso una docente).	Dimensiones culturales de la institución escolar para generar cambios y vinculación.
El trabajo interdisciplinario ofrece la posibilidad de ayudar integralmente a los jóvenes. Requiere de un perfil de docentes comprometidos que los acompañen. (Esto lo puso una docente).	Es diferente pensar las pasantías para las ciudades capitales que para las del interior. Es necesario considerar las características y estructura del mercado de trabajo local (Chaco, economía informal).
Integración de actores territoriales tras un mapeo de actores locales. Generación de ámbitos/locaciones posibles = acompañamiento a procesos de actuación. Incentivo a la protocolización: municipios, OSCs, cooperativas.	Baja percepción de corresponsabilidad de los actores.
Inglés en la extensión de la jornada.	A observar: vinculado al diagnóstico que se garantice una variedad de propuestas siempre tomando en cuenta la opinión y deseo de los y las jóvenes y adultos, adolescentes mediante consultas permanentes antes, durante y después del proceso.
Complementación con visitas educativas a diferentes empresas o lugares (para la motivación).	A observar: es necesario un monitoreo que garantice que esas propuestas generen a mediano plazo temporalidad resultados en términos de igualdad de oportunidades e inclusión para todos y todas.
Amplitud de las propuestas requiere pisos de resultados esperados. No es lo mismo una experiencia en el ámbito privado (empresa/organización) que en el sector público (Estado).	En el último año de secundaria, los chicos que tienen pensado ir a la universidad deberían estar abocados a estudiar para rendir sus exámenes de ingreso.
Contar con normas nacionales marco.	
Existencias de nuevos programas.	
Realizar mapeos de instituciones locales, diversificando esos espacios en zonas de baja urbanización.	
Fuente: elaboración propia.	

A lo largo de las intervenciones de los distintos perfiles la conversación se orientó, en su mayoría, a discutir sobre el dispositivo de prácticas profesionalizantes. Un consenso generalizado fue la necesidad de prestar atención a la articulación de estos dispositivos en el marco de la propuesta de la extensión de la jornada escolar para que la incorporación de estos contenidos vinculados al mundo del trabajo priorice integrar nuevas habilidades a la educación de los y las jóvenes e incentivarlos e incentivarlas a pensar en su futuro.

Otra de las ideas exploradas giró en torno a aprovechar los aprendizajes provenientes de la implementación de este tipo de experiencias en la Escuela Técnico-Profesional (ETP). Si bien la mayoría acordó que, como punto de partida, esta experiencia previa podría ser considerada como una fuerza a favor, algunos perfiles destacaron ciertos desafíos. Estos participantes señalaron que un primer punto a considerar es la necesidad de distinguir entre las nomenclaturas “prácticas profesionalizantes”, propias de las ETP como instancias de prácticas reales de trabajo, y “pasantías educativas”, que cuenta con una ley y una reglamentación propia a nivel nacional. Otros destacaron también la dificultad de garantizar, por ejemplo, la cobertura de seguro de estudiantes y docentes para las pasantías dado el tipo de trabajo involucrado, algo bastante aceptado en las prácticas de las ETP dado que el trabajo contempla la manipulación de herramientas.

Respecto al rol de la comunidad educativa en el desarrollo de estas pasantías, una docente destacó como una fuerza positiva la gran motivación de algunos perfiles docentes para buscar métodos alternativos de vinculación con los temas que interesen al estudiantado. En este aspecto, otros participantes reconocieron que es posible que los saberes que éstos necesitan probablemente no los tengan actualmente los mismos docentes. Esto dio pie a que otros perfiles trajeran como una fuerza negativa la formación docente, que la mayoría categorizó de deficiente. Dos perfiles realizaron propuestas concretas para contrarrestar este obstáculo: aprovechar el conocimiento de los profesionales que ocupan cargos docentes sin título docente incorporando los saberes específicos de su área de *expertise* en los espacios curriculares a su cargo, y utilizar nuevas herramientas y metodologías que partan de la exploración temática de los mismos estudiantes en las que el conocimiento específico sea presentado por ellos y ellas.

Tras conversar brevemente sobre la dificultad de conseguir perfiles de acompañamiento capacitados, tanto por parte de la escuela como de la institución receptora, el grupo de trabajo se detuvo a debatir sobre el rol de los y las referentes del sector productivo en la implementación de estas propuestas. Para algunas personas, la motivación de ir formando perfiles comprometidos con los valores del trabajo y la posibilidad de incentivar a estudiantes a ciertas orientaciones de formación superior/profesiones resulta de gran interés para ciertas empresas. Sin embargo, otros participantes sostuvieron que, en algunos sectores productivos o de pequeñas y medianas empresas, los costos de sostener un o una pasante sobrepasan sus beneficios. Algunos participantes destacaron que el desafío se encuentra en que el “empleador o receptor” no asume el lugar que debería tener como coproductor en el proceso de formación para el trabajo, ni en la implementación de pasantías ni en el sistema educativo en general.

MESA REGIONAL CENTRO

En esta mesa regional, si bien se presentó la propuesta en sus tres dimensiones, el trabajo y discusión en grupos se centró en el tercer pilar: vinculación con el mundo del trabajo.

Grupo de trabajo 1

El primer grupo estuvo compuesto por representantes de la comunidad educativa, del sector público y organizaciones de la sociedad civil. Consultados acerca de sus primeras reacciones ante la propuesta, los y las participantes señalaron que comparte varios rasgos comunes con muchas de las acciones que viene implementando la provincia de Córdoba en el nivel secundario. Particularmente, se rescató la experiencia de las escuelas PROA, que incluyen: extensión de la jornada escolar (8 horas diarias), tutorías que acercan herramientas personalizadas y acompañan los distintos ritmos de aprendizaje, y una fuerte vinculación con el mundo del trabajo.

Respecto a la implementación de un SAT, los y las participantes coincidieron en que es una estrategia pertinente para fortalecer la trayectoria escolar. De hecho, señalaron que en la provincia de Córdoba el sistema de gestión nominal envía una alerta cuando algún/a estudiante registra tres inasistencias consecutivas, de modo tal de activar el protocolo de intervención definido en el régimen académico. Además, las escuelas cuentan con perfiles específicos para acompañar las trayectorias de los y las estudiantes (ej. coordinadores de curso y preceptores). No obstante, se reconoció que contar con la herramienta resulta insuficiente si los equipos escolares no se la apropian.

Respecto a la extensión de la jornada escolar, algunos/as participantes expresaron no estar de acuerdo con ese pilar de la propuesta. Argumentaron que las escuelas secundarias cordobesas ya cuentan con una hora adicional (la jornada escolar es de 6 horas) y que existe una limitación física a la posibilidad de continuar ampliando la jornada. Otros/as, en cambio, señalaron que la extensión de la jornada es una oportunidad para implementar formatos de enseñanza diferentes.

Por último, en la **Tabla 4** se transcriben todos los aportes realizados por los y las participantes en cuanto a las oportunidades y los desafíos para implementar los dispositivos de articulación con el mundo del trabajo propuestos.

Por el lado de las oportunidades, gran parte de los y las participantes coincidieron en que la implementación de pasantías educativas o prácticas profesionalizantes es una estrategia pertinente y relevante para acercar a los estudiantes al mundo del trabajo y brindarles herramientas que pueden resultarles útiles para construir y poner en práctica su proyecto de vida. En particular, se señaló la posibilidad de desarrollar habilidades blandas como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva o aprender a aprender, y de aprender en un espacio distinto al del aula.

TABLA 4.
Oportunidades y desafíos para la implementación de la propuesta de vinculación de la educación secundaria con el mundo del trabajo

Oportunidades	Desafíos
Desarrollar habilidades blandas (trabajo en equipo, comunicación efectiva y aprender a aprender)	Llegar con más fuerza al interior
Tenemos al alcance toda la información [para implementar un SAT]	Currículum: recorridos formativos electivos y diversificados
Marcos normativos (Res. 188/18) para el acompañamiento de las trayectorias escolares	Fortalecimiento del trabajo docente colaborativo e interdisciplinario
Sistema de gestión de estudiantes y dispositivo pedagógico de acompañamiento	Retroalimentación de las experiencias de pasantías laborales para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje internos
Consolidar, ampliar e integrar saberes relacionados al perfil	No confundir con formar “empleados de empresas” (pensar el mundo del trabajo en su diversidad)
Propuesta curricular de Educación de Jóvenes y Adultos con un área específica para trabajar la vinculación con el mundo del trabajo	Capacitaciones específicas para docentes en relación a prácticas y pasantías
Construir/reconstruir el proyecto de vida de los estudiantes	Trabajar de manera mancomunada para acompañar la reconversión laboral
Ejercicio “in situ” de las capacidades que pretende formar la escuela	Estudiar la demanda de los alumnos y capacitarse específicamente para eso
Proyectos institucionales tendientes a la vinculación con el mundo del trabajo	Vinculación con la educación superior (articulación entre niveles)
Conocer entornos con características distintas a lo escolar	Reformar la estructura del secundario
Presentar el “mundo del trabajo” con su diversidad (sector empresarial, emprendedurismo, oficios, profesiones, etc.)	Pensar en formatos diferentes
Más empresas para explorar	Adecuar la legislación vigente en relación con la reconversión del empleo
Nuevas formas de trabajo (colaborativo, home office, coworking)	Brecha de género en relación con las políticas de cuidado y las necesidades de empleo temprano
Son lo más cercano a una experiencia laboral, eso hace que se vaya desarrollando tempranamente un perfil técnico-profesional	Preparación en tecnología, que son las carreras del futuro
Reconocimiento de las desigualdades materiales y simbólicas de las juventudes	

Fuente: elaboración propia.

A su vez, se argumentó que la experiencia de las escuelas técnicas y de la modalidad de jóvenes y adultos puede resultar provechosa a la hora de planificar la implementación de este tipo de estrategias en la secundaria orientada. Respecto a la primera, se resaltó la buena predisposición del sector privado para recibir a estudiantes. Respecto a la segunda, se explicó que la vinculación con el mundo del trabajo es un eje central

de su propuesta y que hay varios aspectos que podrían considerarse. Por ejemplo, la propuesta curricular, que se organiza en torno a áreas del conocimiento, en vez de por disciplinas, y en donde una de esas áreas es la vinculación con el mundo del trabajo.

Por el lado de los desafíos, los y las participantes advirtieron sobre la importancia de preservar el sentido formativo de las pasantías. Argumentaron que su objetivo no debería ser formar a los estudiantes para realizar una tarea concreta, sino ofrecer un primer acercamiento al mundo del trabajo y brindarles las herramientas necesarias para ampliar sus posibilidades de insertarse de manera exitosa en el futuro. Además, señalaron que eso debe estar muy claro tanto para la escuela como para la institución receptora, y que es importante contar con el apoyo de las familias.

Otros desafíos identificados por las y los participantes fueron la posibilidad de ofrecer espacios de distintas características en donde los estudiantes puedan realizar sus pasantías, sobre todo en las zonas más alejadas de los centros urbanos, y de contar con docentes formados para ejercer un rol de acompañamiento a los estudiantes desde la escuela.

Finalmente, algunos/as participantes señalaron la necesidad de poner en discusión el sentido del nivel secundario. Argumentaron que los y las estudiantes no se sienten motivados por el formato actual y que no les brinda las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto de vida. Desde esta perspectiva, se propuso una discusión más general que ponga en debate el propósito del nivel secundario y los conocimientos y capacidades que deberían desarrollar los y las estudiantes.

Grupo de trabajo 2

El segundo grupo estuvo compuesto por representantes de la comunidad educativa, del sector público y organizaciones de la sociedad civil. Consultados acerca de sus primeras reacciones ante la propuesta, los y las participantes señalaron que en el caso de la provincia de Córdoba la propuesta de dos horas más de clases no corresponde ya que la jornada escolar ya es de seis horas. A su vez, respecto a la implementación de un Sistema de Alerta Temprana, se explicó que el sistema de gestión provincial ya permite hacer un seguimiento de la trayectoria de los y las estudiantes, aunque no todos los y las participantes estaban al tanto de esta posibilidad.

Luego se pasó a la discusión sobre las estrategias para fortalecer la vinculación del nivel secundario con el mundo del trabajo. A diferencia de lo que ocurrió en los otros, en este grupo los y las participantes identificaron las oportunidades y los desafíos a enfrentar oralmente y no de forma escrita. La **Tabla 5** busca resumir los aportes realizados por cada uno de ellos.

TABLA 5.
Oportunidades y desafíos para la implementación de la propuesta de vinculación de la educación secundaria con el mundo del trabajo

Oportunidades	Desafíos
Pasantías se incorporan en el sistema de notas como una nota extra	Las pasantías son una carga adicional para los estudiantes
Asociar las pasantías a los intereses de los estudiantes	Las pasantías te atrasan en la cursada de las otras materias
Espacio curricular: Formación para la vida y el trabajo	Las pasantías se realizan en épocas de exámenes
Orientación vocacional dentro de la escuela	Acompañamiento específico a los pasantes
Articular la propuesta formativa con un plan desarrollo local	Formación docente: contar con docentes capacitados para llevar a cabo esta tarea
	Currículum de la formación docente
	Formación de quienes reciben a los pasantes
	Disponibilidad de lugares, posibilidad de traslado, organización institucional
	Mecanismos para establecer convenios entre escuelas y organizaciones o empresas más dinámicos

Fuente: elaboración propia.

Por el lado de las oportunidades, los y las participantes señalaron que la provincia de Córdoba ya cuenta con un espacio curricular que tiene como objetivo acercar a los estudiantes al mundo del trabajo. Se trata de la materia “Formación para la vida y el trabajo”, que se desarrolla desde 3° a 6° año inclusive. El espacio incluye orientación vocacional y busca formar a los y las estudiantes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, la continuidad de sus trayectorias educativas con el ingreso y permanencia en el nivel superior y con la inclusión en el mundo del trabajo. Sin embargo, algunos/as participantes advirtieron que muchas veces el espacio puede resultar excesivamente teórico.

Por otra parte, resaltaron la potencialidad de las pasantías en dos sentidos: para acercar a la escuela secundaria a los intereses de los y las estudiantes y para articular la propuesta formativa del nivel con el plan de desarrollo local.

Por el lado de los desafíos, advirtieron que las pasantías muchas veces resultan una carga adicional para los y las estudiantes, que se atrasan en el cursado de las otras materias y que, al realizarse en épocas de examen, pueden tener un impacto negativo en sus notas. Otros/as participantes identificaron algunos desafíos a nivel logístico . El primero es garantizar una oferta lo suficientemente amplia como para albergar a los y las estudiantes interesados en realizar este tipo de experiencias. El segundo es agilizar los mecanismos para establecer los convenios necesarios entre las escuelas y las instituciones receptoras. Y el tercero es facilitar el traslado de los y las pasantes al espacio correspondiente.

Más allá de lo anterior, algunos participantes argumentaron que uno de los principales desafíos para preservar el sentido formativo de las pasantías es garantizar un acompañamiento adecuado a los y las estudiantes. Agregaron que esto resulta desafiante para la escuela, que debería sortearse con formación específica para la tarea, como para la institución receptora. Respecto a esta última, señalaron que es importante considerar qué incentivos podría tener para llevar adelante un acompañamiento con las características deseadas.

Grupo de trabajo 3

El tercer grupo estuvo compuesto por representantes de la comunidad educativa, del sector público y organizaciones de la sociedad civil. Consultados acerca de sus primeras reacciones ante la propuesta, al igual que en el primer grupo, algunos participantes señalaron sus similitudes con muchas de las acciones que viene implementando la provincia de Córdoba en el nivel secundario. En particular, se destacó que la provincia extendió la jornada escolar una hora, dispone de un sistema de gestión nominal que permite hacer un seguimiento de la trayectoria de los estudiantes y ha venido desarrollando una serie de estrategias para fortalecer el vínculo con el mundo del trabajo (ej. pasantías educativas y “Formación para la vida y el trabajo”). Considerando lo anterior, se concluyó que el desafío en la provincia es fortalecer una política existente.

La **Tabla 6** presenta los aportes volcados por los y las participantes sobre las oportunidades y los desafíos para implementar los dispositivos de articulación con el mundo del trabajo propuestos.

TABLA 6.

Oportunidades y desafíos para la implementación de la propuesta de vinculación de la educación secundaria con el mundo del trabajo

Oportunidades	Desafíos
Desarrollo personal	Sumar diversidad de oferentes empresariales para poder diversificar las realidades en las cuales participan los estudiantes
Interrelación	Fortalecer prácticas de lecto-comprensión y matemáticas
La diversificación de la matriz productiva de Córdoba implica más demanda de empleo	Preparar a los jóvenes en el desarrollo de habilidades blandas
Cubrir puestos laborales IT (+ de 5000 puestos)	Legislación
La inclusión de la tecnología y el mundo digital	Pólizas de seguro en la virtualidad
Reconocimiento de saberes y/o acreditación de saberes del mundo laboral	Rol tutor e instructor

Disposición N° 900 – INET (reconocimiento saberes, diseños curriculares en conjunto con sector socio-productivo y certificación de formación profesional)	Espacios de consenso para articular democráticamente
Capacitación y conocimiento del mundo laboral a través de pasantías	Modificación del currículum
Posibilidad de vinculación real con entornos laborales favoreciendo el desarrollo de habilidades relacionadas con el trabajo	Formación docente
Consejo Provincial de Educación y Trabajo	Brecha de género
Legislación (normativa sobre prácticas profesionalizantes)	Acompañamiento del sector privado
Espacios curriculares (Formación para la Vida y el Trabajo)	Propuestas que fortalezcan las habilidades blandas y las posibilidades de inserción laboral desde sus capacidades
Cortar la brecha de género con tecnología	Reconocimiento del derecho del estudiante como trabajador
	Reconocimiento del acceso al trabajo formal por parte de las familias/estudiantes
	Preparar al estudiante para el cambio continuo
	Segunda lengua
Fuente: elaboración propia.	

Por el lado de las oportunidades, los y las participantes coincidieron que las pasantías educativas pueden resultar una experiencia formativa muy valiosa para los y las estudiantes. En particular, destacaron que el acercamiento al mundo laboral a través de la escuela es una oportunidad para desarrollar habilidades que pueden resultar útiles para ellos y ellas en el futuro. Otros participantes, en cambio, consideran el desarrollo de habilidades blandas como un desafío más que una oportunidad.

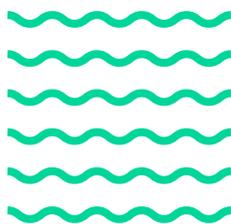
A su vez, también identificaron ciertas condiciones en la provincia que podrían favorecer la implementación de las pasantías. En primer lugar, argumentaron que la provincia tiene una matriz productiva amplia y diversificada que brinda una variedad de espacios en donde realizar las pasantías. En segundo lugar, existe el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, un organismo que reúne a distintos actores (ej. sindicatos, universidades, foros, colegios profesionales, cámaras industriales, productivas y de servicios) y que puede contribuir a fortalecer el vínculo entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo.

También identificaron otras experiencias valiosas de articulación con el mundo del trabajo. Una de ellas son los Centros de Oportunidades Para el Aprendizaje (COPA), que buscan ayudar a jóvenes y adultos a completar los estudios primarios y secundarios, ofreciendo enseñanza de oficios, deporte, recreación y acceso a los bienes culturales de la ciudad. Otra experiencia valiosa es la iniciativa “Primer Paso”,

que busca generar nuevas oportunidades laborales y una primera experiencia de entrenamiento para jóvenes de 16 a 24 años.

Por el lado de los desafíos, los y las participantes advirtieron la dificultad de garantizar la cobertura de seguro de estudiantes para las pasantías, lo cual puede obstaculizar su implementación. A su vez, al igual que en los otros grupos, se hizo énfasis en la importancia de preservar el sentido formativo de las pasantías. En ese sentido, nuevamente se argumentó la necesidad de que los y las estudiantes sean acompañados a lo largo de la experiencia tanto desde la escuela como desde las instituciones receptoras.

Por último, otro de los desafíos identificados fue reducir la brecha de género. Según señalaron, un gran porcentaje de los y las estudiantes que eligen participar de las pasantías voluntarias en la secundaria orientada son varones.



REDUCIR LA **POBREZA**





EMPLEO JOVEN Y ARTICULACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA CON EL MUNDO DEL TRABAJO

Esta sección presenta la síntesis de la mesa de trabajo de la región Cuyo sobre 'Empleo joven y articulación de la escuela secundaria con el mundo del trabajo', llevada a cabo el 5 de julio en la ciudad de Godoy Cruz, Mendoza. El encuentro estuvo enmarcado en la cuarta mesa regional del proyecto, que tienen por objetivo la identificación de consensos en distintas temáticas, a través del intercambio federal, multiactoral e intergeneracional, para la promoción de políticas públicas factibles que impulsen el crecimiento argentino en las próximas cuatro décadas.

Durante el 2022 se llevó adelante un [proceso de consulta](#) del cual participaron jóvenes, especialistas y representantes de la dirigencia sobre los pilares centrales para el desarrollo argentino. Uno de los pilares de acción identificado fue la necesidad de avanzar hacia un sistema integrado de protección social, que incluya políticas de empleo, de formación, transición e inserción al mercado laboral. Es relevante destacar que fue el eje de política pública más jerarquizado por las juventudes, a fin de reducir la pobreza.

De ese proceso, y del trabajo conjunto entre los programas de Protección Social y Educación de CIPPEC, se llegó al diagnóstico que se presentará a continuación.

El objetivo de la mesa de diálogo intersectorial en la región de Cuyo fue el de contribuir a la construcción de una propuesta de política de empleo joven, en el marco del diagnóstico presentado, identificando oportunidades y desafíos en su reglamentación e implementación, considerando los posibles aportes que pueden realizarse desde la educación secundaria.

A continuación, se resume la información presentada y la discusión que se dio en la mesa de trabajo. En primer lugar, se describirá el diagnóstico presentado sobre la temática y la propuesta de CIPPEC. Posteriormente, se detallarán los aportes realizados por las personas que participaron del encuentro.

DIAGNÓSTICO

Mejorar las condiciones de actividad y empleo se trata de uno de los retos más desafiantes a los que se enfrenta Argentina para reducir la pobreza. En esa línea, alcanzar la estabilidad macroeconómica aparece como una condición necesaria pero no suficiente para avanzar en este sendero. Es por ello que resulta indispensable

atender a los problemas de cada realidad mediante respuestas diversas, pero coordinadas, que actúen sobre las distintas barreras a la inserción laboral y la formalización de distintos grupos poblacionales, poniendo el foco en aquellos que presentan mayores barreras en el acceso al mercado de trabajo.

Los y las jóvenes se encuentran dentro de este grupo. Un conjunto de estadísticas brinda el marco cuantitativo del diagnóstico: en el tercer trimestre de 2022, la tasa de desocupación era 3 veces mayor en jóvenes (21.2%) que en el promedio poblacional (7.1%) y alcanzaba un 22.5% en el caso de las mujeres de entre 18 y 24 años (EPH, INDEC). A su vez, entre los/as jóvenes que estaban empleados/as en el mercado laboral, la informalidad ascendía a un 68,3%, más de 30 puntos porcentuales por encima del promedio (37,4%).

Las razones que explican esta situación son varias. Algunas de ellas se vinculan a los desafíos que enfrenta el sistema educativo. En este sentido, se observan grandes dificultades en el nivel secundario para garantizar trayectorias escolares completas y aprendizajes de calidad para todos. De hecho, apenas 2 de cada 10 estudiantes que ingresan a la primaria, llegan al último año de la secundaria en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática (Argentinos por la Educación, 2022).

Además de no hacerlo en tiempo y forma, para gran parte de los y las jóvenes la escuela secundaria es el último nivel educativo formal al que accederán. A nivel nacional, 7 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años termina ese nivel. Esto implica que, durante los primeros años de la juventud, la mayoría de las personas enfrentará el mercado laboral con su formación secundaria y el capital sociocultural que acumularon en sus familias de crianza. De allí surge la importancia de pensar la contribución que hace la escuela secundaria al desarrollo de las capacidades de las personas y a su inserción en el mercado laboral.

Que las juventudes cuenten con dichas capacidades y saberes, que las puedan desplegar al momento de acceder a un primer empleo, y, a la vez, que en estos puestos de trabajo cuenten con experiencias formativas, se torna fundamental para abordar los desafíos que supone su inserción en el mercado laboral.

Como conclusión, este panorama resalta la necesidad de acordar mecanismos para la formación y la contratación de jóvenes y, a su vez, consolidar un sistema educativo que dote a las juventudes de las capacidades y saberes que faciliten su transición hacia la vida adulta, y ofrezca un primer acercamiento al mundo del trabajo, a través de pasantías o prácticas profesionalizantes, entre otras estrategias.

PROPUESTA

CIPPEC considera fundamental impulsar una política de Empleo joven que proponga los ejes normativos para fomentar la contratación de jóvenes en empleos formales privados; que lleve a la mesa de discusión aquellos aspectos de mejora para fortalecer la relación educación-trabajo; y que contenga una propuesta para coordinar los esfuerzos que hacen las distintas áreas del Estado y niveles de gobierno para la promoción de los jóvenes en el mundo del trabajo.

Una política de esta naturaleza debe surgir indefectiblemente del consenso de actores clave, como son el sector empresarial, los sindicatos y el Estado. A través de un acuerdo tripartito, y del involucramiento de las juventudes como principales destinatarios de una iniciativa como esta, se pueden alcanzar los consensos necesarios para mejorar la situación sociolaboral de los y las jóvenes, velando por el respeto a sus derechos.

La construcción de la propuesta se puede pensar en **tres ejes** sobre los cuales dirimir los principales lineamientos. El **primero** se basa en la idea de pensar una ley de empleo joven que incluya aspectos de formación en el ámbito laboral, incentivos a la contratación –mediante beneficios impositivos y/o transferencias monetarias –y una acertada focalización en los beneficiarios de la política para balancear los errores de inclusión y exclusión que pudiera tener el diseño. Por otro lado, el **segundo eje** se basa en el ordenamiento de los programas existentes, con foco en una mayor intermediación laboral que pueda garantizar un ordenamiento entre la oferta y la demanda laboral y el perfilamiento de los jóvenes hacia el mundo del trabajo. Por último, **el tercero** se relaciona con el aspecto educativo, en el cual se evidencia la necesidad de garantizar trayectorias escolares completas y significativas que faciliten la transición de los y las jóvenes hacia la vida adulta y la construcción de su proyecto de vida. En particular, se resalta la imperiosidad de incorporar y profundizar contenidos vinculados con el mundo del trabajo dentro de las materias existentes y/o la creación de nuevos espacios curriculares en el marco de la extensión de la jornada. Por otro lado, se plantea como posibilidad la creación de un sistema de prácticas profesionalizantes para las escuelas secundarias orientadas, que esté liderado desde el sistema educativo.

A partir del planteamiento de estos ejes, se compartieron algunas preguntas disparadoras para el debate. Las mismas apuntaron a determinar cuál debería ser la modalidad óptima de formación en el ámbito laboral, qué tipo de beneficio se debería otorgar y por cuánto tiempo para alcanzar el mejor impacto posible, qué sector de la población se debe privilegiar, qué incentivos son necesarios para promover la terminalidad educativa y la inserción laboral en simultáneo, y qué dispositivos acercan de la mejor manera la educación al mundo del trabajo.

La discusión entre los/as participantes versó alrededor de estas preguntas disparadoras.

MESA DE TRABAJO

La mesa estuvo conformada por 15 representantes de la Dirección General de Empleo y Capacitación, la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico y la Dirección de Educación Técnica de la provincia de Mendoza, funcionarios/as de la Municipalidad de Godoy Cruz relacionados a temáticas de empleo y miembros del Consejo Deliberante de Godoy Cruz. La dinámica del encuentro fue de intercambio cruzado, a partir de las preguntas disparadoras, moderado por los especialistas de CIPPEC en empleo y educación.

Los primeros comentarios de las personas participantes se refirieron al tercer eje de la propuesta, relacionado con el sistema educativo. Al respecto, se evidenció un consenso sobre la escasa **articulación entre el sistema educativo y el mercado de trabajo**. Se argumentó que el nivel secundario presenta grandes dificultades para garantizar que los y las estudiantes egresen incorporando aprendizajes significativos que faciliten su inserción a un primer empleo. En esa línea, se planteó la necesidad de repensar la escuela secundaria. En concreto, se propuso fortalecer su vinculación con el sector productivo a través de la incorporación de propuestas de formación profesional y promover currículums más integrados, organizados por áreas de conocimiento en lugar de dividirlo por disciplinas.

Al mismo tiempo, y vinculado a lo anterior, una cuestión que emergió en la conversación y que las personas participantes identificaron como obstáculo relevante fue que muchos jóvenes carecen de ciertas capacidades consideradas fundamentales por el mercado laboral. Particularmente, se hizo foco en las denominadas “habilidades blandas”.

A su vez, las prácticas profesionales orientadas a estudiantes de la escuela secundaria fueron destacadas como una política relevante para fomentar en los y las jóvenes el desarrollo de ciertos saberes y capacidades que facilitarán su ingreso al mundo laboral. Se planteó la necesidad de generar una mesa de trabajo multiactoral, que promueva una mayor articulación entre el sistema educativo y el sector productivo, para enriquecer estas instancias, conservando su carácter formativo.

Por otro lado, respecto al primer eje de la propuesta, los actores señalaron la necesidad de focalizar la política de empleo en los y las jóvenes con menores probabilidades de empleabilidad. Si bien comentaron que aún no tienen estimaciones cuantitativas sobre esta variable, señalaron que los/as jóvenes entre 18 y 24 años son quienes presentan los mayores desafíos a la hora de encontrar un empleo. Para ello, nuevamente se ahondó en la necesidad de fortalecer las habilidades blandas de los jóvenes y fomentar la ‘cultura del trabajo’, herramientas claves para la búsqueda de un primer empleo.

Al respecto de la **focalización**, también se comentó la importancia de ajustar la política de empleo en función de las necesidades y características de cada región/provincia. Dada la diversidad de estructuras productivas y composición

socioeconómica, un programa útil para una región puede no serlo para otra. Por lo tanto, si bien se consensó en la idea de pensar una política de empleo joven a nivel nacional, se remarcó que es necesaria la articulación regional para su adaptabilidad a las necesidades locales.

Con respecto a la **intermediación del Estado en la temática**, surgieron algunos aspectos interesantes. Por un lado, se mencionó que en la práctica existe una gran distancia entre la comunicación de la política pública y la llegada y aplicación en el territorio. Para ello, emergió la idea de que los programas de empleo puedan ser más autogestionables, con un nexo más directo entre empleado/a y empleador/a. Para que eso suceda, se vuelve necesaria la participación de los municipios y su capilaridad, dado que en la mayoría de los casos son el primer contacto de la sociedad con la política. Se mencionó que tienen que tener un rol más preponderante, funcionando a modo de ventanilla única, con participación en la formación, capacitación e intermediación laboral.

Más allá del consenso logrado respecto a programas más autogestionables, se mencionó el rol relevante que debe tomar el Estado a la hora de controlar y monitorear las relaciones laborales. Se hizo énfasis en la necesidad de pensar en esquemas laborales más flexibles sin que eso implique un peligro sobre los derechos laborales de los/as trabajadores/as.

En resumen, los principales consensos identificados en la mesa fueron los siguientes:

- La necesidad de poner el foco en la terminalidad educativa y en los contenidos y capacidades que se enseñan en el nivel secundario, de manera tal de garantizar el desarrollo de los conocimientos necesarios para facilitar la inserción de sus egresados/as en el mundo del trabajo.
- Existe un déficit de habilidades blandas en los perfiles de los jóvenes que se inscriben en los programas de empleo, para lo cual se vuelve necesaria una mayor articulación y vinculación del sistema educativo con las oficinas de empleo y el sector privado.
- El diseño de incentivos adicionales a los incentivos económicos, que contemplen las necesidades y características propias de cada sector y de cada región.
- La necesidad de una mayor articulación y ordenamiento entre los diferentes programas de empleo que existen a nivel provincial y municipal, en general, y en Mendoza, en particular.
- La idea de que los programas de empleo sean de carácter autogestionables, aunque con una participación activa del Estado, especialmente en lo que concierne a las condiciones laborales y su cumplimiento.

LOGRAR LA
TRANSICIÓN VERDE
JUSTA



HACIA UN SECTOR ENERGÉTICO SOSTENIBLE

Esta sección presenta la síntesis de la mesa de trabajo de la región Patagonia sobre “Hacia un sector energético sostenible”, que se desarrolló el 31 de julio en la ciudad de Neuquén. El intercambio estuvo enmarcado en la quinta mesa regional del proyecto, encuentros que tienen por objetivo la identificación de consensos en distintas temáticas, a través del intercambio federal, multiactoral e intergeneracional, para la promoción de políticas públicas factibles que impulsen el crecimiento argentino en las próximas cuatro décadas.

Durante el 2022 se llevó adelante un proceso de consulta en la cual participaron jóvenes, especialistas y representantes de la dirigencia sobre los pilares centrales para el desarrollo argentino. Uno de los pilares de acción identificado fue la necesidad de una estrategia para el diseño de políticas públicas que contribuya a potenciar la matriz energética.

En esta ocasión, a lo largo del encuentro se propuso debatir sobre el diagnóstico del sector energético, las tendencias globales que lo afectan y los desafíos – de coordinación, infraestructura, incentivos y focalización– a sortear en pos de consolidar una Política Nacional de Energía con objetivos y lineamientos claros para aumentar la oferta y su diversificación, en línea con la transición energética.

El encuentro contó con la participación de 24 representantes del sector público, privado, de la sociedad civil y del sector académico (Ministerio de Producción e Industria de Neuquén, Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, la Cámara de Industria y Comercio de Cippolletti, Intendencia de San Patricio del Chañar la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo, Agencia de Inversiones de Neuquén, Chevron, YPF, Jóvenes por el Clima, Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, Universidad Nacional de Río Negro, entre otros).

A continuación, se resume la información presentada y la discusión que se dio en la mesa de trabajo. En primer lugar, se describirá el diagnóstico de CIPPEC sobre el sector energético y los principales desafíos que enfrenta. Posteriormente, se detallarán los aportes realizados por los/as participantes del encuentro, que se guió a partir de algunas preguntas orientadoras y fue moderado por los/as especialistas de CIPPEC.

DIAGNÓSTICO

La transición energética aparece como un fenómeno global e irreversible. Sus efectos ya son tangibles y afectan de forma directa numerosos sectores productivos, la prestación de servicios y la macroeconomía, como lo muestra la introducción de un impuesto de igualación de emisiones en frontera por parte de Europa que influye en el comercio internacional.

En este contexto, se presentó recientemente el Plan de Transición Energética a 2030 que plantea la transición hacia energías con baja generación de gases de efecto invernadero (GEI). Además, Argentina adhiere al esfuerzo global en la lucha contra el cambio climático a partir de compromisos de reducción de emisiones de GEI, a través de las Contribuciones Nacionales determinadas (NDC), y cuenta con el Plan Nacional de adaptación y mitigación al cambio climático al 2030, que sintetiza las políticas y metas del país para limitar dichas emisiones con el objetivo último de alcanzar la neutralidad de emisiones al año 2050.

Cumplir los objetivos de la transición implica, en particular para el sector energético, un enorme desafío. En la distribución sectorial de emisiones se destaca el sector energético como responsable del 51% de las emisiones nacionales, seguido por el sector agroindustrial con el 39%, la industria con el 6% y el sector de residuos con el 4%. Teniendo en cuenta que el 85% de la matriz energética la explica el uso de hidrocarburos, la transición implicará un proceso de electrificación y descarbonización profunda que modificará en el futuro próximo los procesos productivos, los modos de transporte y la forma que se genera y consume la energía.

Al mismo tiempo, la Argentina puede ser un jugador global de la transición energética: cuenta con vastos recursos -hidrocarburos convencionales y no convencionales y de fuentes renovables- en su territorio, y una historia de liderazgo en capacidades del sector. El desarrollo de los recursos podría, además, jugar un rol mucho más preponderante en la transición energética nacional y de otros países de la región como sustituto de combustibles más caros o de mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la historia reciente muestra que no ha podido garantizar el acceso a la energía de forma abundante, a precios competitivos, y que los incentivos que moldean las decisiones del sector responden más a problemas de orden macroeconómicos y distributivos, y no a prioridades de desarrollo del sector.

La transición energética no es única, sino que se trata de un proceso que responde a las características de cada país, y por lo tanto existen tantas transiciones como países. En el caso de Argentina, es uno de los 10 países en el mundo con mayor incidencia de gas natural en su matriz. Eso no es casualidad. El descubrimiento de Loma de la Lata (Neuquén) en 1977 permitió la implementación de una política pública de reemplazo de petróleo y carbón por gas natural, el desarrollo de una de las redes de transporte más grandes del mundo y la inserción del gas natural residencial como en ningún otro país de la región.

Actualmente existe un esquema de toma de decisiones del sector energético que resulta inconveniente, con una vacancia en términos de un plan energético que oriente las decisiones de inversión pública y privadas. Y más aún, la imposibilidad de dar con un modelo satisfactorio de fijación de precios y tarifas, sumado al uso de los subsidios energéticos como ancla inflacionaria y mecanismo de política social se traduce en mayores subsidios corrientes que son desincentivos para la inversión privada y la transición energética. Así, en el 2022, el sector energético demandó el

2% del PIB en los principales subsidios energéticos, representando el 82% del déficit primario. Este contexto impone importantes barreras para terminar de concretar y poner en valor proyectos de inversión como Vaca Muerta, tales como la falta de infraestructura, de financiamiento y de objetivos consensuados que se sostengan en políticas de largo plazo.

En simultáneo, al panorama local, se suman los recientes shocks externos que han agravado la incertidumbre sobre la disponibilidad y los precios internacionales de la energía, cuando todavía el país depende de la importación de este insumo crítico. La guerra en Ucrania y el alza exponencial del precio del gas natural licuado (GNL) y los combustibles líquidos llevaron de vuelta la balanza energética a mostrar un déficit externo considerable. Este contexto coincide con una compleja situación de disponibilidad de reservas en el Banco Central de la Nación.

En efecto, un primer desafío del esquema actual para las políticas del sector energético argentino es la alta dependencia de la disponibilidad de fondos públicos para la inversión. Al estar subsidiados los precios de la energía eléctrica, el gas y el combustible para el transporte, toda expansión de la oferta aumenta el déficit fiscal. Por la falta de recursos, el Estado pospone las decisiones y en última instancia recurre a mayores importaciones ante el aumento de la demanda. Este círculo vicioso no sólo resulta inconveniente, sino que ha encontrado un límite en la actual crisis fiscal y cambiaría, en síntesis, un trilema por ahora sin solución entre subsidios, producción y financiamiento.

Un segundo desafío agrava el contexto: el retraso de inversiones que podrían resolver los importantes cuellos de botella en infraestructura del sector agrava el déficit operativo. Por ejemplo, no es posible conectar nuevas centrales de generación ante la falta de capacidad de las líneas de transmisión eléctrica, limitando, asimismo, la posibilidad de expansión de la energía renovable en la matriz energética.

Estas problemáticas refuerzan un tercer desafío: cumplir con la meta de que el 20% de la producción de energía sea de origen renovable para el 2025 (establecido por la Ley 27.191) así como de alcanzar el 30% de energías renovables al 2030 y la carbono-neutralidad al 2050, de acuerdo los compromisos asumidos internacionalmente para la transición energética. La materialización de inversiones en generación eléctrica, que implica obligadamente planificación a largo plazo, puede poner en riesgo el abastecimiento futuro a precios competitivos.

DESAFÍOS

En 2023, a 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, CIPPEC propone trabajar en lineamientos para **potenciar la matriz energética** con objetivos claros para aumentar la oferta y su diversificación en línea con la transición energética. Para eso se propone aportar elementos técnicos y lineamientos que contribuyan a

un **Plan Nacional de Energía** que busque consolidar el desarrollo del sector. Estos deberán poder resolver los siguientes desafíos:

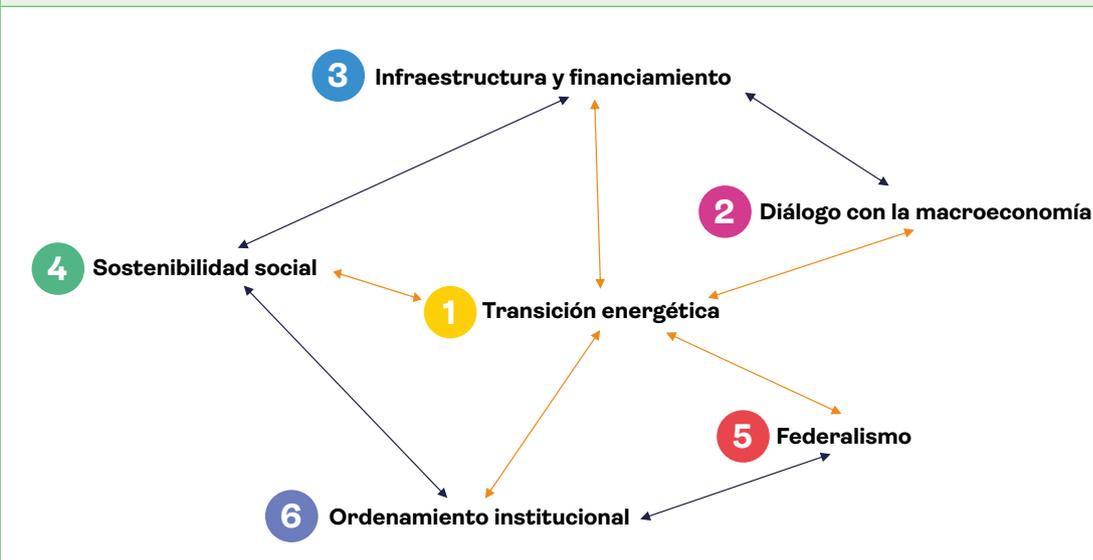
- Desafíos de señales de precios claras que orienten la toma de decisiones de inversión empresarial y consumo de los hogares.
- Desafíos de focalización de recursos en contexto de restricción fiscal priorizando la accesibilidad energética a los consumidores vulnerables de la mano de una tarifa social.
- Desafíos de articulación entre niveles de gobierno para mejorar la coordinación regulatoria con las agencias provinciales, que favorezca soluciones a las inequidades regionales y unifique la planificación de la estructura energética tanto de gas como eléctrica.
- Desafíos de infraestructura, identificando los cuellos de botella.
- Desafíos de transición energética, para la generación de incentivos a la competencia e innovación que reduzcan los costos de servicio, de forma de garantizar una transición a una economía neutral de emisiones, pero al menor costo para los consumidores.

MESA DE DIÁLOGO

Ante el diagnóstico y los desafíos presentados, los/as participantes de la mesa reflexionaron, debatieron y aportaron sus visiones sobre lo que debe tener en cuenta un Plan Nacional de Energía para resolver los desafíos planteados. Las conclusiones de la conversación se pueden agrupar en 6 ejes: 1) transición energética; 2) diálogo con la macroeconomía; 3) infraestructura y financiamiento; 4) sostenibilidad social; 5) federalismo y 6) ordenamiento institucional. Estos ejes están interrelacionados entre sí y es importante atenderlos de manera integral y en simultáneo.

DIAGRAMA 1.

Ejes de conversación de la mesa de debate e interrelaciones



Fuente: elaboración propia

1. Transición energética

Uno de los principales temas que se trató en el intercambio fue sobre los desafíos que deben atender los lineamientos para aumentar la diversificación de la matriz energética, tal como propuso CIPPEC. En primer lugar, se debatió sobre la intermitencia de energías renovables como uno de los principales factores limitantes de la expansión de las energías limpias.

En segundo lugar, se resaltó que los lineamientos e incentivos que busquen aumentar su participación en la matriz no deben comprometer la seguridad energética – como sucedió recientemente en Europa como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, CIPPEC sostiene que el Plan de Energía debe tener revisiones y actualizaciones periódicas para asegurar la sostenibilidad en el tiempo.

En tercer lugar, los/as participantes propusieron distintos mecanismos existentes para impulsar la transición en la matriz productiva e intercambió acerca de su viabilidad y conveniencia. Entre las herramientas nombradas se encuentran los incentivos fiscales, las huellas de carbono, el control sobre daños ambientales en procesos de producción y la reglamentación de que un porcentaje de las regalías se destinen a la inversión en la transición energética.

Por último, se destacó que el Plan también debe contemplar las externalidades positivas de la transición tales como la formación, la capacitación y la generación de empleo.

En simultáneo, los/as participantes destacaron que la transición no se circunscribe al sector energético, sino que se construye desde todos los sectores y actores involucrados, por lo cual emerge como prioritario asimismo fomentar el consumo energético responsable y los procesos de producción con eficiencia energética. Considerando estos factores en particular, las señales de precios que brinde la economía juegan un papel fundamental: el precio bajo de la energía funciona como desincentivo a consumir de manera eficiente. Por eso, es necesario que el Plan de Energía contemple la eficiencia energética desde y para distintos sectores productivos y que consolide el compromiso ciudadano en la materia.

2. Diálogo con la macroeconomía

Los/as participantes, por otro lado, enfatizaron que un Plan Nacional de Energía debe estar alineado con la macroeconomía. En ese sentido, se halló amplio consenso con el diagnóstico presentado por CIPPEC sobre la necesidad de que haya señales de precios claras que orienten la toma de decisiones de inversión empresarial, así como el consumo de los hogares. En un contexto de inestabilidad macroeconómica con alta inflación, la distorsión de los precios relativos es mayor y esto influye en los precios de la energía percibidos por los actores de la economía. Además, los/as presentes resaltaron la necesidad de que el Plan energético esté alineado con el Plan macroeconómico por el rol que tiene el sector en las divisas, tanto en la demanda – para inversión en infraestructura, envío de dividendos y subsidios, entre otros – como en la oferta– a partir de las oportunidades de exportación de los recursos de nuestro territorio, por ejemplo.

3. Infraestructura y financiamiento

Uno de los desafíos principales del sector energético es que la infraestructura que requiere el desarrollo del sector se enfrenta a un cuello de botella ocasionado por la dificultad de acceso al financiamiento. En ese sentido, CIPPEC enfatizó que el retraso de inversiones que podrían resolver los importantes cuellos de botella en infraestructura del sector actualmente agrava el déficit operativo. Por ejemplo, no es posible conectar nuevas centrales de generación ante la falta de capacidad de las líneas de transmisión eléctrica, limitando, asimismo, la posibilidad de expansión de la energía renovable en la matriz energética.

A este punto, se señaló en el intercambio entre participantes que, además, es necesario considerar la infraestructura en hogares y barrios vulnerables para asegurar su acceso sostenible. Por otro lado, destacaron que, para la generación de divisas del sector, es clave desarrollar infraestructura de gran envergadura. En ese sentido, se conversó sobre cómo la restricción de divisas va en detrimento de la atracción de inversiones extranjeras, dado que la falta de divisas a nivel nacional

impide o dificulta la repatriación de las ganancias de las empresas. Por eso, sostuvieron que es importante desarrollar y alinear incentivos fiscales en municipios y provincias para poder solventar esta situación y generar un círculo virtuoso para la inversión y posterior desarrollo del sector.

4. Sostenibilidad social

En línea con la necesidad de infraestructura para garantizar el acceso de los hogares vulnerables, un punto relevante que aportaron los/as participantes es que el Plan debe tener en cuenta la sostenibilidad social. En particular, en la mesa se destacó que el Plan debe garantizar la accesibilidad a los hogares vulnerables y a pueblos originarios. Para lograrlo se destacó que el rol del Estado es fundamental para priorizar la cobertura de las poblaciones más vulnerables y ubicadas en zonas más recónditas, ya que los incentivos del sector privado son menores dado que implica enfrentar mayores costos en zonas de menor densidad poblacional. En ese sentido, algunos/as destacaron que estas poblaciones suelen ser las más afectadas por los daños ambientales del proceso productivo del sector y que, por eso, es necesario incluir a los pueblos originarios y agentes del ambientalismo a la discusión, como busca hacer el Acuerdo de Escazú al que Argentina suscribió.

En síntesis, los/as participantes destacaron que la matriz energética debe ser pensada en el marco de un modelo de desarrollo integral con “rostro humano”, es decir, que la exclusión no sea la contracara de la sostenibilidad del sector. En particular, resaltaron que éste tiene impactos en otros sectores y que es fundamental tener estas interrelaciones presentes a la hora de diseñar un Plan Nacional de Energía. Por ejemplo, remarcaron que, de encarecerse la energía, este incremento de costos se traslada a la canasta básica para toda la población. Por lo tanto, se concluyó que no hay política energética viable ni transición energética que no ahonde desigualdades preexistentes, si no se entiende el desarrollo del sector como parte de una política integral.

5. Federalismo

Los/as participantes de la mesa compartieron el diagnóstico de CIPPEC en el sentido de que un plan nacional de energía debe ser de carácter federal: debe contemplar y poder resolver las diferencias e inequidades territoriales en el sector energético. En ese sentido, celebraron que la mesa de diálogo se organizara en una provincia productora como Neuquén para poder incluir su visión en los lineamientos Energía que busquen consolidar el desarrollo del sector. Asimismo, se destacó la necesidad de que las decisiones que se tomen acerca del sector incluyan las voces de los actores de las provincias productoras de energía, sobre todo en ámbitos de representación donde tienen menor peso relativo por la dinámica parlamentaria.

6. Ordenamiento institucional

Por último, en la mesa hubo acuerdo con el diagnóstico de CIPPEC sobre que el origen de la falta de claridad en las reglas que necesita el desarrollo del sector es producto de los vaivenes en las políticas públicas en los últimos 20 años. Si bien esta es una falencia presente en otros sectores del país, los/as participantes enfatizaron que es un factor de especial importancia para el sector energético porque el período de repago de las inversiones en materia energética es a largo plazo. En síntesis, destacaron que la intermitencia de las reglas, la falta de un marco jurídico estable y la falta de un horizonte claro en este aspecto atenta contra las inversiones y el desarrollo del sector, por lo que el Plan Nacional de Energía debe atender prioritariamente.

Además, se destacó que el Plan debe coordinar la articulación entre distintos niveles del Estado para resolver las particularidades regionales y que haya reglas claras y consistentes entre Nación, las provincias y los municipios.

En síntesis, los/as participantes acordaron que un Plan nacional de energía debe tener el consenso desde todos los sectores y la autoridad tal para desarrollarse como política integral de Estado, atendiendo a su sostenibilidad económica, ambiental y social, y centrarse en el largo plazo, para evitar los vaivenes de política pública, que van en detrimento de su desarrollo.

POLÍTICA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Esta sección presenta la síntesis de las mesas de trabajo de las regiones Centro y NOA sobre “Política integral de mejoramiento de viviendas”, llevadas a cabo el 25 de abril en Córdoba capital, y el 15 de junio en San Salvador de Jujuy. Los encuentros estuvieron enmarcados en la segunda y tercera mesas regionales del proyecto, que tienen por objetivo la identificación de consensos en distintas temáticas, a través del intercambio federal, multiactoral e intergeneracional, para la promoción de políticas públicas factibles que impulsen el crecimiento argentino en las próximas cuatro décadas.

Durante el 2022 se llevó adelante un [proceso de consulta](#) del cual participaron jóvenes, especialistas y representantes de la dirigencia sobre los pilares centrales para el desarrollo argentino. Uno de los pilares de acción identificado fue la necesidad de avanzar en el diseño de una política nacional urbana para lograr ciudades sostenibles y resilientes, que ponga foco en la planificación y el ordenamiento territorial, y cuente con un abordaje integral de la problemática (evitando la fragmentación sectorial entre vivienda, hábitat, infraestructura, espacio público, y otros). En este contexto, uno de los puntos de consenso fue que la población más vulnerable (que no accede a servicios básicos, a una vivienda de calidad y/o habita en barrios populares) es la que se ve más afectada y expuesta a riesgos de inundaciones, olas de calor y otros impactos climáticos.

En adición, se realizó un relevamiento digital dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años de todo el país sobre las demandas, prioridades y preocupaciones de las juventudes en las temáticas del proyecto. Como resultado, se registró que el 76% de los y las jóvenes encuestados/as consideran que los gobiernos en todos sus niveles tienen un alto grado de responsabilidad a la hora de combatir el cambio climático. Además, el relevamiento permitió identificar que una de las principales consecuencias del cambio climático, que más preocupa a los y las jóvenes, es la profundización de las desigualdades sociales (46%).

A partir de estos hallazgos, de [investigaciones complementarias](#) y del trabajo realizado por el equipo de Ciudades de CIPPEC, se identificó la necesidad de comenzar a abordar la problemática desde el ordenamiento territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda, con el fin de mejorar la calidad de vida de los hogares y reducir su exposición a posibles riesgos climáticos. En este sentido, se diseñó y elaboró una propuesta de política pública de mejoramiento de viviendas, anclada a un plan de ordenamiento territorial. Esta propuesta fue presentada en las mesas regionales de diálogo mencionadas y conversadas con los/as funcionarios y especialistas en la temática de las regiones Centro y NOA.

La realización de ambas mesas regionales resultó una experiencia sumamente valiosa. En primer lugar, posibilitaron presentar el diagnóstico elaborado, e identificar consensos, disensos y oportunidades para mejorarlo. De igual manera, desarrollar y trabajar la propuesta de política de mejoramiento de viviendas en estos espacios regionales y multiactorales brindó una excelente oportunidad para federalizar el diálogo sobre hábitat y vivienda y contar con una perspectiva local y territorial. Estos encuentros plurales y multisectorial – que reunieron a más de 45 funcionarios/as provinciales y municipales, especialistas, referentes de organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado vinculado a la temática - contribuyeron a nutrir y fortalecer la propuesta de política pública presentada por CIPPEC, principalmente en términos de diseño, operatividad, institucionalidad y viabilidad.

Con el fin de dar cuenta del proceso llevado a cabo en los encuentros regionales, este documento se divide en cuatro secciones: la primera consiste en un breve diagnóstico de la situación habitacional en la Argentina; la segunda sección presenta la propuesta; la tercera aborda la síntesis del debate de la Mesa Regional Centro y, por último, la cuarta presenta la síntesis del debate de la Mesa Regional NOA.

SECCIÓN 1

Diagnóstico sobre la problemática de vivienda en Argentina

En Argentina, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio Federal Urbano (OFU), elaboradas en base al censo de 2010, el 32% de los hogares –aproximadamente 4.000.000 de hogares– habita en viviendas deficitarias. Dos tercios de este déficit, es decir 2.600.000 hogares, presentan deficiencias cualitativas y requieren ampliaciones o mejoras críticas, mientras que el tercio restante conforma el déficit cuantitativo, tratándose de hogares que requieren una vivienda nueva porque la comparten con otros y/o es de calidad constructiva precaria.

La problemática del hábitat y la vivienda es estructural y afecta –de distintas formas– a casi todos los sectores de la población argentina. Desde el retorno de la democracia, si bien la mayoría de los hogares que habitan en viviendas deficitarias requieren mejoras y ampliaciones, la política habitacional estuvo concentrada principalmente en la construcción de vivienda nueva, lo cual resulta insuficiente para atender la problemática. Además, no solo se evidencian dificultades para acceder a la vivienda en propiedad (por el desfasaje entre los elevados precios del suelo y de la vivienda y los ingresos de la población, la falta de acceso al crédito, entre otros motivos), sino también a la vivienda en alquiler (por la baja de la oferta y el consecuente aumento del valor de los alquileres, los requisitos de acceso, entre otros).

La gestión de las políticas de vivienda y hábitat requiere de un suelo regulado y ordenado para garantizar el acceso a los servicios básicos y a los servicios urbanos, como el transporte público y los espacios verdes. Sin embargo, debido a la falta de

planificación y ordenamiento territorial, las ciudades argentinas crecen de forma desordenada: por un lado, se expanden en exceso dificultando la provisión de servicios y, por otro lado, se densifican las centralidades de las áreas metropolitanas de forma desbalanceada. Entre 2010 y 2016, gran parte de los principales aglomerados urbanos del país se expandieron hasta 1,5 veces más que su crecimiento poblacional, sin una planificación territorial adecuada.

En este sentido, la desarticulación entre la política habitacional (tanto de construcción de vivienda nueva, como de mejoramiento y de integración sociourbana) y las políticas de planificación territorial y de suelo, principalmente en lo que respecta a la infraestructura urbana básica, agravan la situación. En esta línea, también se registran dificultades de coordinación vertical, entre los diferentes niveles de gobierno, y horizontal, entre los organismos como, por ejemplo, los ministerios.

En síntesis, los desafíos que enfrenta la temática incluyen las dificultades para acceder a una vivienda (ya sea en propiedad o en alquiler) y/o mejorarla; la falta de planificación del crecimiento urbano y la ausencia de coordinación entre los tres niveles de gobierno y los organismos. A estos desafíos se le suma la falta de información consistente y desagregada sobre la temática, y la ausencia de políticas de sustentabilidad.

SECCIÓN 2

Propuesta

En función del diagnóstico realizado y de los principales desafíos identificados, la propuesta de CIPPEC está orientada a mejorar la calidad de vida de las personas, a partir de una política de mejoramiento de viviendas que atienda el déficit habitacional cualitativo mediante la financiación de ampliaciones y mejoras en viviendas localizadas tanto en barrios formales como informales. El alcance y el financiamiento será nacional, pero la implementación corresponderá a los municipios y hogares beneficiarios. Los municipios deberán presentar al gobierno nacional un proyecto en el que detallen la zona de implementación y luego, una vez aprobado, se abrirá la convocatoria para que los hogares que allí habitan puedan aplicar para ser beneficiarios.

Dado que Argentina es un país federal y que cada nivel de gobierno tiene competencias en la política habitacional, la coordinación entre nación, provincias y municipios resultará fundamental para su puesta en marcha.

La política cuenta con tres componentes principales:

- Asistencia financiera a hogares beneficiarios –propietarios/as que viven o alquilan sus viviendas, o disponen de un inmueble vacío que requiere mejoras para

ser alquilado– segmentada de acuerdo a sus necesidades (subsidios, créditos hipotecarios con o sin tasa subsidiada) y de corto plazo, que se canalizará a través del sector público y del sector privado. En el caso de los hogares con jefatura femenina, se otorgarán facilidades adicionales.

- Asistencia técnica obligatoria durante todo el proceso, lo cual busca garantizar la necesidad, la relevancia, la calidad, el control y seguimiento de las obras, promoviendo la sustentabilidad y perdurabilidad de las viviendas.
- Articulación interjurisdiccional entre la política de mejoramiento y los procesos subnacionales de planificación y ordenamiento territorial. Estos procesos de planificación contemplan la integración socio-urbana, la planificación territorial y la provisión de infraestructura, que deben estar alineados con la política de mejoramiento para garantizar su eficacia e impacto.

SECCIÓN 3

MESA REGIONAL CENTRO

a. Información sobre la mesa

El 25 de abril se llevó a cabo la Mesa Regional Centro en la Ciudad de Córdoba. En este encuentro participaron funcionarios/as de la Provincia y la Ciudad de Córdoba como también de las Municipalidades de Rosario y de Río Cuarto; referentes locales del Ministerio Nacional de Desarrollo Social y representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de universidades.

Durante el encuentro se presentó el diagnóstico y la propuesta, y se generaron dinámicas para conocer la mirada de los participantes al respecto. Para ello, se propuso que los/as participantes se dividieran en mesas, según sus preferencias, de acuerdo a los tres componentes de la propuesta: 1) Asistencia financiera; 2) Asistencia técnica; y 3) Articulación Interjurisdiccional. Debido a que muchos/as participantes eligieron el último componente (Articulación Interjurisdiccional), se decidió dividir dicho grupo en dos mesas y unificar en una tercera mesa los otros dos componentes (Asistencia financiera y técnica).

b. Síntesis sobre el diálogo de la mesa

Comentarios y reacciones respecto al diagnóstico

En cuanto al diagnóstico, la mayoría de los/as participantes se mostraron de acuerdo e, incluso, algunos de ellos/as enfatizaron en algunas aristas. Por un lado, se halló acuerdo sobre la falta y la necesidad de planificar a escala local. Se agregó que es

fundamental considerar las características geográficas de cada localidad al diseñar una política. También se destacó la importancia del aporte de las cooperativas en los barrios populares. Quienes sostuvieron este argumento, comentaron que el Estado no cuenta con los recursos ni la capacidad técnica para intervenir en todos los barrios y, por lo tanto, es crucial la labor que realizan las cooperativas.

Por otro lado, se sugirió la realización de un estudio socioeconómico de la vivienda y los hogares que la habitan, para mayor comprensión de las necesidades reales de los hogares, en pos de adecuar las políticas en esa dirección.

Comentarios y reacciones respecto a la propuesta

La mayoría de los/as participantes coincidió en la necesidad de llevar adelante una política de mejoramiento habitacional, que atienda el principal déficit del país: el cualitativo. En este sentido, comentaron que cuentan con experiencia al respecto, ya que hay programas nacionales de mejoramiento, pero que lo abordan desde otro enfoque. Un participante hizo hincapié en la importancia de contar con consenso social y voluntad política en torno a la propuesta en caso de que se implemente, con el fin de que pueda continuar su ejecución ante el traspaso de gestiones.

Algunos/as participantes mencionaron que es importante tener en cuenta la mercantilización que se genera en torno a los mejoramientos, debido a la venta de los materiales y al aumento posterior del valor de la vivienda. También propusieron pensar el proceso de abajo hacia arriba, articulando con las organizaciones de la sociedad civil en el territorio, ya que ellas observan y conocen las necesidades de las familias. En esta línea, otros/as señalaron la necesidad de considerar la participación comunitaria o vecinal.

Por otro lado, se expresó que la propuesta atiende a un segmento de la población, por lo cual se consideró necesario diseñar políticas para los/as inquilinos/as que atiendan las dificultades que encuentran a la hora de alquilar.

Comentarios y reacciones respecto a la propuesta, por componente

1. Asistencia financiera y técnica

Los/as participantes valoraron de forma positiva ambas asistencias. Algunos propusieron generar articulaciones entre la academia y los hogares beneficiarios, de forma tal que estos últimos reciban capacitaciones sobre cómo administrar el dinero otorgado mediante el subsidio o el crédito y cuáles son los conceptos técnicos básicos para garantizar una correcta mejora o ampliación del hogar.

En el caso de la asistencia financiera, se hizo hincapié en la importancia de que se ajuste a las necesidades e ingresos de los hogares, considerando cada caso particular. Incluso, explicaron que es necesario tener en cuenta las características socioculturales de cada localidad, ya que son diferentes a lo largo de todo el país, y determinan cómo los hogares utilizan su dinero.

Por otro lado, en cuanto a la asistencia técnica, se reafirmó la importancia de este componente para garantizar que las edificaciones perduren y sean seguras, y se sugirió que se podría llevar adelante mediante convenios de prácticas profesionales entre el municipio y colegios profesionales y/o universidades que cuenten con carreras de arquitectura y urbanismo. De esta manera ambas partes podrían beneficiarse: por un lado, los/as estudiantes que están por recibirse pueden ganar experiencia al supervisar obras bajo la tutoría de profesionales ya recibidos/as y, por otro lado, el municipio puede contar con más personal para el seguimiento y la supervisión de las obras. En esta línea, y coincidiendo con la propuesta, volvió a emerger el potencial rol de las cooperativas, las cuales podrían colaborar en la asistencia técnica a los hogares en barrios populares.

Además, otros/as participantes propusieron adicionar un componente de asistencia social, de forma tal que los hogares sean acompañados durante la realización de las obras y la presentación de solicitudes de asistencia financiera y/o rendiciones de avances.

Por último, varios/as participantes resaltaron, además, la importancia de que la asistencia técnica considere el bioclima y las características constructivas de cada región del país, con el fin de generar mejoras sustentables que permitan ahorrar energía. Explicaron que esto no suele ocurrir en la mayoría de los programas que se impulsan desde el Estado Nacional.

2. Articulación interjurisdiccional

En cuanto a este componente, los/as participantes valoraron de forma positiva que la política considere el acceso al hábitat y a la vivienda de forma conjunta, dejando a un lado la mirada sectorizada de la problemática, y que ponga el foco en la escala local, ya que los municipios presentan flexibilidades que pueden facilitar la implementación de la propuesta. De todas formas, algunos/as participantes recomendaron que la propuesta considere la heterogeneidad que existe entre los municipios en cuanto a sus tamaños, capacidades y procesos. En esta misma línea, varios/as participantes destacaron que es fundamental que la propuesta se ajuste a la realidad local de cada municipio, de forma tal que no sea una política nacional “enlatada”.

En relación a los otros niveles de gobierno, algunos/as participantes resaltaron la importancia del rol de las provincias, tanto para los municipios pequeños y medianos, que no cuentan con amplias capacidades de planificación territorial; como para ciudades grandes, que deben articular de forma interjurisdiccional. Además, otros/as participantes destacaron que las provincias tendrían un rol clave en la propuesta de mejoramiento integral de viviendas, ya que en muchos casos son las que brindan los servicios públicos.

Más allá de los niveles de gobierno intervinientes, se consideró fundamental incluir procesos participativos, de escucha activa y también de acompañamiento a la comunidad, a lo largo de los procesos de planificación e implementación de las iniciativas.

Asimismo, se discutió acerca de la importancia de incorporar la visión de adaptación y mitigación del cambio climático en la elaboración de planes de ordenamiento territorial, así como de los procesos constructivos.

Por otro lado, en cuanto al nivel nacional, en algunos casos se demostró preocupación por la falta de articulación interministerial, ya que puede ser un potencial obstáculo para la implementación de la política. Por último, hubo expresiones sobre la relevancia de repensar la ciudad y las formas de habitar, de forma más general, que atienda a la diversificación de la oferta habitacional.

Conclusión del diálogo

A modo de conclusión, el intercambio entre los/as referentes y especialistas locales de la mesa regional Centro fue muy enriquecedor, dado que los/as participantes pudieron brindar su mirada sobre la problemática habitacional, que contribuyó al posterior robustecimiento de la propuesta de política pública.

A partir de sus aportes, se reforzó la necesidad de contar con la participación activa de las provincias en la propuesta y se decidió adicionar el componente de asistencia social al de asistencia técnica en la propuesta. En esta línea, las conversaciones en el encuentro permitieron validar la opción de generar convenios entre los gobiernos subnacionales e instituciones (como Universidades o Colegios de Profesionales) para la asistencia técnica. Asimismo, se impulsó la idea de participación comunitaria a lo largo del proceso de política pública.

Por último, a través del intercambio en la mesa también se reforzó la importancia de incluir requerimientos de sustentabilidad en la propuesta, haciendo hincapié en la necesidad de que se considere el bioclima de cada región del país.

SECCIÓN 3

MESA REGIONAL NOA

a. Información sobre la mesa

El 15 de junio se llevó a cabo la Mesa Regional NOA en la Ciudad de Jujuy. En este encuentro participaron diputados/as de la provincia de Salta; funcionarios/as de la Provincia de Jujuy; de la Municipalidad de San Salvador, Palpalá (Jujuy), San Lorenzo (Salta) y Tafí Viejo (Tucumán); representantes de organizaciones de la sociedad civil,

de la academia, de universidades y de empresas de desarrolladores inmobiliarios.

Desde la Mesa Regional Centro a la Mesa Regional NOA transcurrió un mes, durante el cual desde CIPPEC se continuó desarrollando la propuesta. Los principales cambios se centran en la adición de la asistencia social al componente de asistencia técnica y en la profundización del componente de articulación interjurisdiccional. En esta línea, el nombre del tercer componente se ajustó a “Plan de Ordenamiento Territorial”, ya que tanto las provincias como los municipios que deseen participar de la política deberán elaborarlo. De esta forma, se busca que mediante dicho plan se garantice la articulación de los mejoramientos de vivienda con los mejoramientos del hábitat (obras de infraestructura y equipamiento urbano, y procesos de integración sociourbana).

Durante la Mesa Regional NOA se presentaron el diagnóstico y la propuesta (con los nuevos agregados), para conocer la mirada de los/as participantes al respecto. En un primer momento, se llevó adelante una conversación grupal en modo plenario, en la cual se invitó a los/as participantes a comentar impresiones y miradas acerca del diagnóstico. Luego, se propuso que se dividieran en mesas, según sus preferencias, de acuerdo a los tres componentes de la propuesta: 1) Plan de Ordenamiento Territorial; 2) Asistencia financiera; y 3) Asistencia técnica y social.

b. Síntesis sobre el diálogo de la mesa

Comentarios y reacciones respecto al diagnóstico

En relación al diagnóstico, la mayoría de los/as participantes afirmó que la fragmentación y el crecimiento desordenado de las ciudades se ve en sus municipios, donde hay sectores con viviendas acomodadas, barrios del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y otros de ingresos medios con mucho déficit habitacional.

Algunos/as de los/as presentes plantearon diferencias con el ReNaBaP y cuestionaron que desde Nación no se hayan apoyado en los organismos provinciales y municipales, ya que son ellos quienes abordan y conocen la temática y los territorios para llevar a cabo el relevamiento. En respuesta, otros/as participantes resaltaron la importancia del ReNaBaP y que el mismo haya sido impulsado por organizaciones sociales y territoriales. De igual manera, destacaron el trabajo de la Secretaría de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tanto los proyectos de obras que financian, como la coordinación para la actualización del ReNaBaP.

En relación al abordaje de la problemática, la mayoría resaltó la importancia de considerar las realidades locales, capitalizando el conocimiento de los municipios, y tomando en cuenta la diversidad territorial al momento de diseñar políticas nacionales.

Algunos/as participantes reforzaron la necesidad de planificar las ciudades a largo plazo y también de implementar políticas de mejoramiento de vivienda, que atiendan

no solo la problemática habitacional, sino también la ocupacional y que lo hagan de forma participativa.

Otros/as, resaltaron la urgencia de adaptar los modelos constructivos para que sean más eficientes, en particular considerando los costos de la energía, y la importancia de usar las herramientas que brinda la tecnología, tanto para visualizar mejor la envergadura de la problemática, como para generar nuevas formas de financiamiento, sobre todo para los grupos poblacionales más jóvenes.

Por último, algunos/as hicieron hincapié en la necesidad de eficientizar las intervenciones del Estado, especialmente en el contexto macroeconómico actual. Mencionaron que, para resolver el déficit habitacional, el Estado debería fomentar y subsidiar la demanda y no la oferta como ha sucedido históricamente. Para ello, destacaron la relevancia de la participación y articulación con el sector privado para impulsar que los desarrolladores inmobiliarios realicen vivienda para vivir y no como inversión.

Comentarios y reacciones respecto a la propuesta, por componente

1. Plan de Ordenamiento Territorial

En la mesa del primer componente, hubo consenso unánime en la necesidad y la importancia de planificar el territorio, pero se resaltó que hacerlo puede llevar mucho tiempo y no suele acompañar los tiempos políticos. Por esta razón, algunos/as sugirieron que la política de mejoramiento no esté anclada al ordenamiento territorial, por las demoras que esto generaría.

Los/as funcionarios de las provincias resaltaron que contar con una ley de ordenamiento territorial es un factor a favor, pero no suficiente. Se resaltó que se precisa voluntad política y capacidad técnica para armar planes de ordenamiento, tanto por parte de las provincias, como de los municipios, y esa es la principal razón por la cual los planes escasean. Uno de los presentes comentó que la ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial de la provincia de Jujuy obliga a la provincia a prestar asistencia técnica a los municipios para que sancionen sus normas, pero que hasta el momento ninguno de los 64 municipios lo ha hecho.

Además, se destacó como fundamental considerar la regularización dominial y la escrituración, la formación de especialistas en la temática, la regeneración del tejido urbano, la generación de lotes con servicios y viviendas para alquiler.

2. Asistencia financiera

En el caso de la asistencia financiera, se identificaron un conjunto de obstáculos respecto a los créditos. En primer lugar, se señaló que la tasa de repago suele ser

baja, más aún cuando los créditos son otorgados por organismos o bancos públicos. Además, el proceso utilizado por los gobiernos para solicitar el pago de las cuotas a los hogares es costoso. Por lo tanto, no solo aumentaría el plazo de recupero del dinero, sino que también aumentarían los gastos por parte del gobierno para solicitar el pago.

Por otro lado, también se mencionó que las personas que no pueden demostrar sus ingresos no podrían acceder al crédito. Una participante comentó que esta situación podría resolverse con ayuda de la digitalización: explicó que las personas que no puedan demostrar el origen de sus ingresos podrían generar una identidad virtual, a través de una plataforma, que le permita registrar sus ingresos y, en caso de contar con ingresos suficientes, poder solicitar un crédito.

Los/as participantes intercambiaron y reflexionaron sobre el origen de los recursos. Si bien desde la propuesta se recomienda que los fondos provengan del nivel nacional, los/as participantes pensaron otras alternativas, entre ellas, los bonos de carbono. Una participante explicó que actualmente las provincias no pueden acceder a bonos de carbono. Sin embargo, argumentó que si la normativa se modificara y se adicionara un componente de sustentabilidad en la propuesta (que promueva la reducción de gases de efecto invernadero), las provincias podrían vender bonos de carbono para financiar la implementación de esta política.

Por último, se argumentó que gran parte de las construcciones en Jujuy son realizadas mediante autoconstrucción, por lo tanto, se destacó que la asistencia financiera sería utilizada principalmente para la compra de materiales en esta provincia.

3. Asistencia técnica y social

En la mesa que abordó el tercer componente, los /las participantes resaltaron la importancia de brindar asistencia técnica y social tanto antes como durante las intervenciones, desde un abordaje integral.

En relación a la etapa pre-obra, se mencionó que los/as beneficiarios/as deben recibir un sostenido acompañamiento y asesoramiento acerca de qué refacciones realizar y cómo destinar los recursos. En este sentido, se resaltó que deben recibir asistencia técnica para la confección de planos y que para ello se podrían explorar sinergias con colegios profesionales y universidades. De igual manera, se hizo hincapié en la necesidad de adecuar las intervenciones y los materiales constructivos a las realidades locales (urbanas y rurales) y regionales, en particular en términos de elección de materiales con mayor adaptación a las condiciones climáticas de las distintas zonas. Además, se argumentó que es importante asistir a los/as beneficiarias en la elaboración de un plan de ejecución de obra, que contribuya a una mejor organización y rendimiento de los tiempos y recursos. Aquí se sugirió que desde los gobiernos se articule con corralones de materiales para mejorar precios.

Respecto a la etapa de obra, los/as participantes consideraron ideal analizar qué procesos se pueden automatizar de la asistencia técnica, y darle más peso al

acompañamiento social. También señalaron el riesgo que la dinámica política impida o complique la implementación y gestión de la política de mejoramiento.

En relación a los actores involucrados, hubo consenso en que los municipios deberían conformar los equipos que lleven adelante la asistencia de forma inter y multidisciplinaria y considerando las distintas dimensiones del hábitat. Asimismo, sugirieron que la asistencia debe estar articulada fuertemente con el sector privado y la academia. Además, se sostuvo que los municipios deberían poder construir la línea de base sobre la cual luego se medirá el impacto de la política, a partir de un relevamiento y sistematización de datos públicos, así como sirviéndose de estudios académicos existentes. También se sugirió que las cooperativas podrían prestar la asistencia social, pero que ese servicio debería ser evaluado y monitoreado, para garantizar estándares de calidad uniformes.

Por último, se resaltó la importancia de la incorporación de una dimensión participativa en la política de mejoramiento de vivienda, en general, y en la dimensión de asistencia, en particular. Se argumentó que la existencia de una instancia más general y multiactoral donde el público general pueda verse involucrado nutriría la asistencia de los/as técnicos con la mirada local y cultural de los/as receptores de la política.

Conclusión del diálogo

La Mesa Regional NOA constituyó un excelente espacio para el intercambio de ideas, las cuales nutrieron y fortalecieron tanto el diagnóstico como la propuesta de política de mejoramiento de viviendas.

Del trabajo en plenario, en mesas por componente y de la puesta en común de cierre, surgió repetidamente la necesidad de involucrar a los actores locales y territoriales en el diseño y la implementación de políticas públicas en general y de la política de mejoramiento en particular, para que las soluciones no estén estandarizadas, sino que se adecúen a las diversas realidades. En particular, tomó relevancia la cuestión ambiental y climática.

Además, se planteó el desafío de los tiempos y los recursos que conlleva la planificación del ordenamiento territorial y se destacó el impacto de la voluntad política para llevarlo adelante.

De los intercambios surgió también la necesidad de articular los distintos componentes de la política propuesta con el sector privado, la academia y organizaciones sociales, y se presentó el desafío de incorporar la variable participativa para cada componente.

Por último, podemos destacar que se identificaron consensos en torno a la necesidad de abordar el déficit cualitativo, el rol de los municipios, la importancia de la planificación territorial, el acompañamiento a los/as beneficiarios.

CONSOLIDAR UNA
POLÍTICA EXTERIOR
AL SERVICIO DEL
DESARROLLO
NACIONAL



CONSOLIDAR LA POLÍTICA EXTERIOR AL SERVICIO DEL DESARROLLO NACIONAL

Esta sección presenta la síntesis de las mesas de trabajo de las regiones NEA, Centro y Patagonia donde se discutió sobre Política Exterior para potenciar el desarrollo nacional y local.

Los encuentros estuvieron enmarcados en la primera, tercera y quinta mesas regionales del proyecto, que tuvieron por objetivo la identificación de consensos en distintas temáticas, a través del intercambio federal, multiactoral e intergeneracional, para la promoción de políticas públicas factibles que impulsen el crecimiento argentino en las próximas cuatro décadas.

Durante el 2022 se llevó adelante un proceso de consulta del cual participaron jóvenes, especialistas y representantes de la dirigencia sobre los pilares centrales para el desarrollo argentino. En un relevamiento específico que se realizó alrededor de las demandas, prioridades y preocupaciones de las juventudes para dichos pilares, al preguntar sobre el grado de federalismo percibido en la política exterior de nuestro país, un 77% de los/as jóvenes encuestados/as contestó que considera que la estrategia nacional en esta materia tiene en consideración solamente a algunos gobiernos subnacionales (principalmente a CABA, Buenos Aires y Córdoba). A partir de esta información y del trabajo de REDAPPE, se propuso incorporar la perspectiva de las provincias identificadas como relegadas de la estrategia de la política exterior.

A continuación, se resume la información presentada y la discusión que se dio en las distintas mesas de trabajo.

DIAGNÓSTICO

Las relaciones internacionales son una herramienta fundamental para el desarrollo territorial, donde en el mundo actual, globalizado e interconectado, las oportunidades de cooperación, comercio e inversiones provienen de diferentes actores de dicho sistema.

La Argentina se caracteriza por una diplomacia multilateral, pacifista y abierta al mundo, buscando que la producción, tanto agrícola-ganadera como la industrial, alcance la mayor cantidad de mercados posibles. A su vez, la economía del conocimiento sigue avanzando y creciendo en suelo argentino, generando beneficios que impactan directamente en el desarrollo.

Asimismo, es un país federal y sus provincias poseen potestades internacionales asignadas por los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional. Sin embargo, la política exterior todavía presenta desafíos respecto a incorporar y reflejar en su accionar, la necesidad y las voces de las provincias argentinas. A partir de ello, se considera pertinente generar instancias que permitan favorecer la articulación de las estrategias de gestión internacional de los actores subnacionales para obtener el mayor provecho de su vinculación con el mundo y con actores locales; así como de la articulación industria-comercio-gestión.

MESAS DE TRABAJO

En primer lugar, el **NEA** suma en términos geográficos el 10,42 % del territorio nacional. Concentra al 9% de la población total de nuestro país y es una región postergada, ya que posee la mitad del ingreso por habitante del país y los indicadores sociales más adversos fruto de asimetrías históricas; situación que se podría mejorar mediante una fuerte cooperación intranacional e internacional¹. La economía de la región se basa predominantemente en actividades primarias, en especial frutas, algodón, arroz, horticultura y la explotación forestal. La mayor parte de la industria se focaliza en el procesamiento de productos agropecuarios, madera, celulosa y papel, y cultivos tradicionales como yerba, té y tabaco.

Para el desarrollo de las provincias del NEA se presenta el desafío de llevar adelante acciones estratégicas e innovadoras en materia de vinculación con el mundo, así como también brindar un espacio de fortalecimiento regional, de cooperación y entendimiento entre las provincias para atraer inversiones, promover el comercio internacional y la vinculación con actores estratégicos del panorama nacional e internacional, incluyendo a empresas públicas y privadas y a organismos regionales y multilaterales de crédito.

En segundo lugar, la **Región Centro** es una zona productiva e industrial con características comunes y está constituida por gobiernos subnacionales que poseen antecedentes consolidados y destacados en sus estrategias de internacionalización. Asimismo, existe un bloque de integración subnacional como instancia de diálogo y coordinación para las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, cuya finalidad es: “promover el desarrollo económico y social, el desarrollo humano, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura”².

Finalmente, respecto a la **Región Patagónica**, la gestión internacional de las provincias a través de la cooperación internacional, la búsqueda estratégica de inversiones

1 Fuente: https://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/82504/mod_resource/content/2/Guia%20NEA%202021.pdf

2 Fuente: <http://www.regioncentro.gob.ar/institucional/>.

y el impulso a las exportaciones, son ejes de gran importancia en la búsqueda del desarrollo económico y armónico del país. En este sentido, potenciar el comercio internacional resulta uno de los objetivos clave, así como la necesaria inclusión en el mundo con el objetivo de ser reconocidos como país productor de bienes de valor. La Región Patagónica posee una relevancia clave para el desarrollo de la Argentina. En el presente y en aras del futuro, las provincias de Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Tierra del Fuego son fundamentales para el comercio exterior. Esto se puede observar analizando datos del INDEC, donde en el 2022 fue la segunda región más exportadora luego de la pampeana, con una suba del 42,1% respecto al año anterior. Los destinos principales fueron: Unión Europea, MERCOSUR, Chile, Suiza, Medio Oriente y USMCA. Cabe destacar que se observa un rol primordial del complejo del aluminio, un papel sustancial en el sector minero metalífero y el litio, los despachos de complejo oro y plata y el sector petrolífero-petroquímico, entre otros³. Por otro lado, la Patagonia es una de las regiones fundamentales para el debate de las inversiones que requiere el país. Las energías renovables, el gasoducto Nestor Kirchner, Vaca Muerta, el hidrógeno verde, entre muchos otros ejes claves, requieren de diálogo y debates multinivel y multiactor para acordar puntos comunes para las futuras políticas públicas que la región requiere.

Es por esto que se considera que para el desarrollo de las provincias de las mencionadas regiones se presenta la necesidad de profundizar, potenciar y diversificar las acciones estratégicas e innovadoras en materia de vinculación con el mundo. Además es prioritario brindar un espacio de fortalecimiento regional, para propiciar la cooperación y el entendimiento entre las provincias dirigidas a: atraer inversiones, promover el comercio internacional, acordar políticas sostenibles y amigables con el ambiente, debatir terminologías comunes y una agenda consensuada que tenga como eje los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y vincularse con actores estratégicos del panorama nacional e internacional, incluyendo a empresas públicas y privadas y a organismos regionales y multilaterales de crédito.

Actualmente, el sistema internacional muestra desafíos como las disputas de poder y las crisis energética, ambiental y alimentaria. Sin embargo, ofrece también oportunidades, como la profundización de vínculos con los mercados del Pacífico y el acceso a financiamiento para obras y servicios que impactan en la calidad de vida de nuestros ciudadanos/as, por mencionar algunos.

REGIÓN NORESTE

El 6 de marzo de 2023 se realizó en el Campus de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de la ciudad de Resistencia, Chaco, la “Mesa de Diálogo Intersectorial del NEA”. REDAPPE coordinó el Taller “Consolidar la política exterior para potenciar el

3

Fuente: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_23E165E1E942.pdf

desarrollo local”, con el objeto de debatir, delinear y consensuar líneas de acción sobre cooperación, integración y vinculación con actores estratégicos del escenario nacional e internacional, para potenciar la internacionalización del NEA y consolidar la política exterior en beneficio del desarrollo local. Participaron de la misma aproximadamente 30 personas de los sectores público, productivo, académico y de la sociedad civil, principalmente de las provincias de Chaco y Corrientes.

Los/as participantes dialogaron e intercambiaron opiniones sobre dos ejes fundamentales para esta región: 1) Cooperación e inversión y 2) Integración regional, logística e infraestructura. A continuación, se destacan los principales consensos alcanzados en esta jornada. Respecto a los proyectos relevantes para fomentar el desarrollo de sus provincias y el NEA, concordaron en la lejanía que existe a nivel local del eje “Buenos Aires-San Pablo” del MERCOSUR. Además, destacaron el papel de los Comités de Integración como un actor relevante y acordaron la necesidad de fortalecer las capacidades locales en materia de relaciones internacionales e inversiones. En este sentido, determinaron que precisan de mayor capacitación y asistencia técnica, acompañamiento logístico, facilidades para contratar recursos humanos y subsidios para emprendedores/as. Es por esto que las propuestas que surgieron de este diálogo fueron:

Propuestas de la Región Noreste

Avanzar en el proceso de modernización y actualización de la legislación de los bloques regionales para mayores beneficios.

Desarrollar una zona de integración, en vez de una zona de frontera a nivel local con incentivos para el comercio intrarregional y la cooperación intrafronteriza.

Mejorar la articulación con el sector público, en especial la AFIP y la Aduana, las gobernaciones y los municipios, las cámaras empresariales y la academia.

Homogeneizar las normas, la simplificación de trámites, la incorporación de técnicos en la formulación de políticas públicas y la promoción de incentivos, en conjunto con la academia y el sector productivo, para el ingreso a carreras universitarias que sean útiles para el desarrollo de la producción y el comercio intrarregional.

Fortalecer recursos humanos calificados (en Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, Ingeniería, entre otras), mejorar la promoción internacional de la región del NEA y las políticas públicas con carácter federal de incentivo a la producción y comercio de las economías locales.

Fuente: elaboración propia.

REGIÓN CENTRO

El encuentro se llevó adelante el martes 25 de abril en la Universidad Siglo 21 en la Ciudad de Córdoba. Participaron alrededor de 50 representantes de los sectores público, privado, academia y sociedad civil de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. En esta ocasión, se dividió a los participantes en 3 subgrupos de trabajo, a partir de la expertise e interés de cada uno/a: comercio exterior, inversiones y cooperación.

El grupo de **comercio exterior** consensuó que los actores con capacidad exportadora claves de la región son: los productores de bienes primarios (cereales, oleaginosas, yerba mate, miel); las empresas dedicadas a la manufacturas de origen agropecuario (alimentos, aceites, miel, frutas y hortalizas); los productores locales de biocombustibles; la industria metal-mecánica (destinada a la producción de maquinaria agrícola); la industria automotriz; el sector servicios (educación); el software y el sector farmacéutico.

Asimismo, analizaron los mercados a potenciar para el comercio de la región e identificaron a: MERCOSUR, el resto de América, África y Asia.

Por otro lado, reflexionaron sobre los actores claves para las políticas regionales de comercio y establecieron:

- Academia, para ayudar en la formación de recursos humanos con herramientas suficientes para explotar el potencial exportador de la región.
- Congreso de la Nación, para el dictado de normas claras y que incentiven la producción para aumentar el valor agregado y la penetración en mercados no tradicionales.
- Organismos del Estado que tengan normas claras en materia de calidad sanitaria, como por ejemplo el SENASA que debe actuar holísticamente y evitar tomar medidas fitosanitarias según el lugar de donde proviene la producción, ya que estas barreras dificultan el acceso a mercados extranjeros.
- Poder Ejecutivo, por medio de Jefatura de Gabinete y Ministerios, para ayudar en el desarrollo internacional y exportador con visión federal.

Además, se identificaron distintos recursos necesarios:

1. El financiamiento: líneas de crédito para el apoyo a la internacionalización y expansión de la capacidad de producción y exportación;
2. La estabilidad macroeconómica: tipo de cambio único y eliminar la inflación e impuestos innecesarios;
3. El desarrollo de infraestructura: mejorar la conexión vial y ferroviaria entre los centros productivos y los puertos de Rosario, Santa Fe, Paraná, Concordia, Reconquista, entre otros; potenciar la hidrovía del Paraná.

Finalmente, los desafíos identificados para el comercio exterior fueron: mejorar la articulación público-privada y academia-sector productivo; potenciar la adaptación a los mercados, conociendo las regulaciones fitosanitarias y acompañando a los diferentes rubros.

En conclusión, acordaron que se necesita de un Estado socio, cuya dirigencia sea capaz de planificar a largo plazo, donde la academia sea un actor relevante que contribuya a explotar y desarrollar el máximo de las capacidades de los diferentes actores productivos, dando las herramientas necesarias para un correcto diagnóstico de selección de producto a exportar y mercado al cual aspirar a competir. De esta forma, los actores productivos se posicionarían como el motor del crecimiento sostenible y federal, a la vez que permitirían a la Región Centro ser líder en las exportaciones de producción de bienes primarios, manufacturas y servicios.

Respecto al eje de **inversiones**, se analizaron diferentes aristas de la situación actual y a futuro de la región. Los actores participantes consideraron insuficiente la articulación público-privada, intermunicipal y multinivel (Nación, Provincia, Municipios). Asimismo, detectaron la falta de comunicación de información y de recursos por fuera de Buenos Aires, especialmente de las oportunidades de financiamiento. Además, consideraron necesario fortalecer la estructura y las herramientas legales, así como también federalizar las oportunidades a través de instituciones, capacitaciones y puntos focales. Se mencionó como una buena experiencia Pro Córdoba⁴ -organismo de promoción de exportaciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba-, pero sugirieron que faltan instancias similares a nivel local.

Asimismo, se analizó la posibilidad de que las agencias regionales se encarguen de la articulación y la capacitación acorde a las necesidades y capacidades de las regiones. También mapearon los actores relevantes del sistema internacional, como la República Popular China, demás actores asiáticos, los BRICS, en especial los vinculados con financiamiento. Se destacó que si bien acceder a la información sobre el financiamiento disponible es fundamental, la información disponible se considera escasa. Se resaltó la importancia, a su vez, de la participación de las comunidades en esos debates. El financiamiento a nivel nacional y regional también se puede ver fomentado por la tecnología, y el rol de los nuevos medios para difundir información y oportunidades.

Otras dimensiones identificadas como importantes a reforzar en relación a las inversiones fueron la investigación y la extensión, especialmente vinculadas al sector productivo.

Se sugirió la segmentación para la búsqueda de oportunidades de inversión y la generación de sistemas amigables de información y postulación de proyectos para financiamiento. Asimismo, se postuló deseable la generación de instancias de vinculación entre sector privado y el financiamiento, centralizandola información en una plataforma de acceso abierto.

Finalmente, el grupo de **cooperación** remarcó la necesidad de avanzar en la capacitación de los recursos humanos, la necesidad de generar datos e información local, la importancia de institucionalizar espacios de diálogo y toma de decisiones, así como federalizar la política exterior.

4 Más información en <https://www.procordoba.org/quienes-somos-4277.html>

Propuestas de la Región Centro	
Comercio Exterior	Diseñar una estrategia de inserción internacional, con perspectiva regional y federal.
	Articulación continua de canales institucionales existentes y actores público/privados.
	Acompañar con mayor financiamiento los procesos de internacionalización de pequeños productores.
Inversiones	Creación de Agencias territoriales y/o fortalecimiento de secretarías vinculadas a lo productivo que fortalezcan el diálogo intersectorial para la elaboración de políticas de inversión. Que vinculen las ventajas competitivas de la región con el mapeo de posibles inversores.
	Detectar oportunidades en actores internacionales no tradicionales y federalizar el acceso a la información.
	Diseño, ejecución, implementación y monitoreo de inversiones.
	Proyectos y financiamiento. Incorporación de poblaciones locales en la participación pública; rendir cuentas y estándares de acceso a la información.
	Financiamiento a los nuevos medios y mayor democracia participativa para generar mayor acceso a la información y un rol activo de la ciudadanía.
	En materia educativa está la necesidad de poder articular el desarrollo científico y la transferencia hacia el sector privado.
	Centralizar la información y aumentar la capacidad institucional en el acceso de la información.
Exportar conocimientos a través de convenios de cooperación con las universidades.	
Cooperación	Profesionalización de los recursos humanos de los gobiernos locales para el liderazgo y gestión de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Especialmente enfocado en los/as tomadores de decisión. Los actores destinatarios y la articulación debe ser teniendo en cuenta a: Provincias de la Región Centro, Ciudades de la Región Centro, Instituciones de la Región Centro y Comunidades regionales de las provincias.
	Creación de un Observatorio para monitorear e investigar problemáticas regionales comunes y encarar proyectos de cooperación a nivel internacional. Incorporar la regionalización de indicadores entre provincias siguiendo principios de: trazabilidad, comparabilidad, apertura, relevancia, actualización. Esto con el fin de elaborar políticas públicas basadas en evidencia y medir impactos y resultados en toda la región.
	Institucionalización de mecanismos de gobernanza (alianzas multisectoriales e intergeneracionales) con registro y compromisos concretos. Es pertinente remarcar el protagonismo que tuvo el MERCOSUR en el debate, ya que consensuaron que se deben potenciar convenios marcos previos que existen a nivel MERCOSUR y localidades transfronterizas.
	Estrategias de federalización de la política exterior, mediante instancias de discusión y acuerdo para la construcción de un contenido y estrategia de política exterior “subnacional”. Instituciones que busquen potenciar el sector productivo subnacional. Idea de creación de una Agencia Pro Región Centro (similar a Agencia Pro Córdoba) orientada a la promoción de la Cooperación.
	Instancias de foro, encuentros para la revalorización de espacios de diálogo y la ampliación de la agenda de política exterior. Incorporación de nuevos ejes a la discusión sobre cooperación internacional: cultura, tecnología, transversalización de la perspectiva ambiental, juvenil y el diálogo intergeneracional. Consideración de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y la problemática de la desigualdad (de ingresos, social, acceso a servicios, etc.)
Fuente: elaboración propia.	

REGIÓN PATAGÓNICA

La mesa de la región patagónica se llevó adelante el día 31 de julio en la Legislatura de Neuquén, de la cual participaron más de 30 referentes/as. El debate estuvo articulado en torno a la cooperación, las inversiones y el comercio exterior, aunque también surgieron como temas relevantes la integración regional y la Cuestión Malvinas.

En la mesa de **comercio exterior**, se debatió acerca de los aranceles de Chile y cómo repercuten en la competitividad de los productos argentinos. También se acordó que es necesaria una mayor participación de las provincias y de los gobiernos locales en los debates y el diseño de la política exterior. Por ejemplo, se mencionó la vinculación de Argentina con el MERCOSUR y el bajo protagonismo de los gobiernos subnacionales en el análisis de los proyectos, estrategias y vínculos.

También se recalcó la debilidad en el flujo de la información desde el nivel nacional hacia las provincias, dado que es frecuente que haya recursos para el financiamiento al sector productivo y comercial pero estas oportunidades no se transmiten. Los/as participantes marcaron el proyecto “40 años de democracia. Consensos y prioridades de las juventudes y la dirigencia política” como un ejemplo de proceso democratizante y que puede servir como antecedente para la mejora en el flujo de la comunicación entre niveles de gobierno.

Por otro lado, se argumentó que no se puede pensar en una inserción internacional de Argentina con resultados concretos de desarrollo sin contemplar estrategias desde las realidades a las que van a impactar.

Asimismo, hubo consenso respecto a fomentar la reproducción de <<mercados de nicho>>, que son altamente competitivos a nivel internacional. Hubo un tiempo dedicado exclusivamente a analizar la necesidad de segmentación de la producción y las políticas para que sean más efectivas.

Por otro lado, hubo consenso en que el MERCOSUR debe servir de horizonte para el desarrollo nacional y para el comercio exterior, en particular.

Respecto a los recursos humanos, se resaltó la importancia de revertir la incapacidad de consolidación de equipos técnicos de relaciones internacionales o comercio exterior en el largo plazo, al ser necesarios para los gobiernos subnacionales. También se mencionó la necesidad de reforzar la capacitación de la administración pública provincial, especialmente en términos de presentación de informes, carpetas y solicitudes de financiamiento y herramientas.

Por otro lado, se remarcó la relevancia del rol de las micropymes para el comercio y el desarrollo local, por lo cual se sugiere fomentar su incorporación como un actor clave en el diseño de las políticas públicas. Sin embargo, se destacó que es necesario seguir trabajando en la maduración organizacional del sector para poder posicionarse como agentes exportadores.

En el grupo de **cooperación internacional**, los principales ejes temáticos debatidos fueron: la relevancia de Vaca Muerta para el desarrollo nacional, la perspectiva sobre la cooperación internacional, las estrategias de desarrollo, la situación de Malvinas, el fortalecimiento del MERCOSUR y la interacción entre provincias y el Estado Nacional para la configuración de la política exterior argentina.

Los principales puntos de consenso fueron que: no existe en la mayor parte de los sectores presentes, un área específica de cooperación internacional como así tampoco profesionales visibles con dicha expertise. A su vez, la relevancia de Vaca Muerta y la proyección internacional que tiene para el desarrollo nacional. Sin embargo, los beneficios de su explotación no se extienden a los/as ciudadanos/as de la región.

Además mencionaron la necesidad de fortalecer las economías regionales, con integración estratégica y respeto por las idiosincrasias de las provincias y de los gobiernos locales; así como la necesidad de potenciar el desarrollo de la región, en sintonía con el cuidado del medio ambiente. Se considera útil estudiar buenas prácticas exitosas de otros territorios para poder aplicar elementos que sirvan a nivel local. Finalmente, coincidieron en la importancia del sentido de responsabilidad social y en la relevancia en el desarrollo de la infraestructura necesaria. Respecto a la Cuestión Malvinas, hubo un consenso entre los diferentes actores, entendiéndose que la importancia está estrechamente vinculada a la soberanía nacional en torno al territorio y los recursos.

Por otro lado, entre los principales puntos de disenso se identificaron: las estrategias a implementar para potenciar Vaca Muerta, para que los beneficios del desarrollo se extiendan a los/as ciudadanos/as; la implementación de dichas estrategias: planificación, financiamiento, actores involucrados, etc.; y las implicancias en torno al concepto de cooperación internacional.

En el eje de **inversiones**, participaron profesionales del sector público, privado y sociedad civil. En el inicio, se debatieron distintos aspectos que permitieron construir un diagnóstico inicial vinculado a las condiciones materiales de la provincia y la región patagónica, así como su impacto en las inversiones. Posteriormente, el análisis se articuló a partir de las características institucionales de relación entre el estado central y las unidades subnacionales.

El análisis primario abordó las falencias de infraestructura que atraviesan a la Patagonia y a la Provincia del Neuquén. Específicamente, las limitaciones que imprimen las distancias y estado de rutas para el traslado y/o exportación de los productos de la zona, cuyo principal modo de transporte son los camiones. Asimismo, las grandes extensiones de la región constituyen un inconveniente en relación a la ubicación geográfica de la Provincia del Neuquén y a la distancia respecto a los puertos ubicados sobre el Atlántico, principal salida de los productos argentinos hacia el mundo. Tanto los participantes del sector público, como aquellos del sector privado, coincidieron en que sería de gran utilidad para la provincia aumentar la vinculación con Chile dada la cercanía. Esto reduciría los costos en transporte y de

los insumos que reducen la competitividad de la producción neuquina y facilitaría la salida de la producción local hacia el Pacífico y la correspondiente inserción de productos en mercados asiáticos.

Otra cuestión que surgió en el debate fue remarcar que si bien la producción energética es en la actualidad el principal ingreso de la Provincia del Neuquén, emerge necesario dotar la de valor agregado, así como diversificar la matriz productiva que hoy se centra en los hidrocarburos. Teniendo en cuenta los vaivenes internacionales, se identificó necesario planificar el paulatino desarrollo de energías renovables que permitan un desarrollo continuo y sostenible, intentado evitar la dependencia a la venta de gas y petróleo. También se hizo hincapié en la importancia de fomentar otras industrias fuera del sector hidrocarburífero, tales como el turismo y la producción de energía eléctrica.

Respecto a las limitaciones institucionales, se identificó necesario jerarquizar y robustecer los organismos comunes de la Patagonia existentes pero que no han tenido un impacto real en la política regional y/o nacional, como es el caso del Parlamento Patagónico. Los/as participantes afirmaron que podría dotar de peso específico a la región en el diálogo con la Nación y con otras regiones, incluso en el debate parlamentario del Congreso, dado que a nivel regional se contaría con 30 diputados/as y 18 senadores/as.

Los/as participantes coincidieron en que la coordinación entre las provincias patagónicas daría como resultado el fortalecimiento regional para los espacios de negociación, incluso en posibles vinculaciones con el exterior en busca de financiamiento, como se hace a nivel nacional vía la integración en organismos internacionales, generando espacios de protección para el mercado y aumentando la competitividad argentina en el mercado global.

Otro elemento analizado desde el plano normativo-institucional versó sobre la relación entre la provincia del Neuquén, como poseedora de recursos naturales estratégicos, y el Estado Nacional. Se señaló la necesidad de que las provincias puedan tener más incidencia en la toma de decisiones de las cuestiones energéticas, para incidir en la concreción y mantenimiento de las obras para el transporte de los insumos producidos, que no son posibles sin los aportes económicos del Gobierno Nacional. No obstante ello, señalaron que esas contribuciones nacionales en ocasiones atentan contra el federalismo y la autonomía de los diversos niveles de gobierno dado que los proyectos llegan de forma hermética, con bajas posibilidades de intervención. Otro elemento que se sugiere revisar es el reparto de beneficios de la explotación hidrocarburífera en términos de Nación - provincias.

Un elemento destacado por los/as participantes del sector civil fue la necesidad de que el desarrollo industrial y las inversiones que del mismo se desprenden generen también un impacto en las localidades donde se ubican estas industrias, en pos del desarrollo social y las mejoras en las condiciones de vida de las poblaciones que se insertan en esas zonas productivas. Para ello, identifican fundamental involucrar a las comunidades en los diálogos y las decisiones que afecten sus entornos ambientales.

Por último, se mencionó el tema de la Cuestión Malvinas en relación a los recursos, tales como los pesqueros. Se resaltó necesario continuar con las políticas sostenidas en relación a las Malvinas y la Antártida, que fortalecen la posición del país en relación a esos territorios e impulsan el reconocimiento de los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas. En relación a los recursos marinos, se resaltó que es necesario aumentar la cooperación de los países del MERCOSUR en relación a estos temas.

Como denominador común, se identificó la necesidad de fortalecer a las provincias en relación al proceso de debate y toma de decisiones relacionadas a la política internacional, definida a nivel nacional.

Propuestas de la Región Patagónica	
Cooperación	Impulsar una legislación articulada para facilitar y promover la integración regional.
	Generar una perspectiva de cooperación internacional para fomentar el desarrollo de complejos hidroeléctricos de pequeña escala.
	Investigación orientada a conocer las cadenas de valor existentes para identificar brechas profesionales y oficios requeridos.
	Fomentar la capacitación de profesionales técnicos en áreas críticas para el desarrollo regional.
	Diseñar un plan estratégico de integración regional para el desarrollo socio productivo.
Comercio Exterior	Generar aranceles y acuerdos bilaterales teniendo en consideración a las economías regionales, por sector y de forma segmentada para evitar las falencias de los análisis macro.
	Generar incentivos para la producción primaria, como la baja de cargas tributarias, capacitaciones, financiamiento, políticas de acceso al crédito, diálogo multinivel, entre otros.
	Fomentar la reconversión productiva.
	Fomentar la incorporación de las cámaras binacionales de comercio en los procesos de comercio exterior.
	Generar instancias de diálogo intersectorial patagónico.
	Federalizar la agenda de política exterior teniendo en cuenta los actores provinciales y locales.
	Fortalecer la marca Patagonia argentina como emblema nacional y defenderla a nivel internacional. Los actores señalaron que esto es fundamental porque la producción de mercados de nicho requiere que la condición patagónica sea competitiva.
	Facilitar créditos blandos a largo plazo y con tasas de interés competitivas. Aquí se generó un debate acerca de la factibilidad de generar la posibilidad de devolución en especie, lo cual se sugiere que se continúe estudiando para su posible implementación.

Inversiones	Trabajar con legislación a nivel nacional que permita a las provincias poder gestionar de forma más eficiente las inversiones y los beneficios de sus recursos y su producción.
	Mejorar la infraestructura material de la Provincia.
	Coordinar esfuerzos entre las provincias patagónicas y reforzar los organismos regionales ya existentes.
	Impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que fortalezcan el mercado local y regional a partir de un impacto social directo en las condiciones de vida de las localidades.
	Renegociar el margen de autonomía de los gobiernos subnacionales (tanto provincial, como local) para lograr la aplicación de un verdadero federalismo.
	Articular trabajo con las embajadas para la búsqueda de inversiones externas.
	Aumentar la eficiencia en la logística para el comercio.
Fuente: elaboración propia.	

A modo de conclusión, se observan consensos en las tres mesas referidos a:

1. El fortalecimiento de los recursos humanos capacitados en las provincias en Relaciones Internacionales y áreas específicas relacionadas.
2. La federalización de la política exterior a través de una mayor participación de las provincias en espacios de debate y análisis para la toma de decisiones con perspectiva federal.
3. Mejorar los canales de comunicación entre el Estado Nacional y las provincias respecto a oportunidades y recursos a los cuales estas últimas pueden acceder.
4. Reforzar los esfuerzos por la integración regional con perspectiva federal.
5. Generar instancias de participación ciudadana para debatir los temas de política exterior que tienen estrecha vinculación con el desarrollo local.
6. Fortalecer las capacidades estatales, a través de la institucionalización de áreas de internacionalización y de formalizar espacios de debates y participación con referentes provinciales y locales.

CIPPEC 



Cofinanciado por
la Unión Europea

 RED**APPE**